



REPUBLICA ARGENTINA

DIARIO DE SESIONES

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

9ª REUNION – 7ª SESION ORDINARIA
5 DE MAYO DE 2004

**Presidencia del señor presidente provisional del Honorable Senado,
doctor MARCELO A. H. GUINLE, y del señor vicepresidente
del Honorable Senado, doctor MARCELO E. LOPEZ ARIAS**

Secretarios:

Señor JUAN H. ESTRADA y señor CARLOS A. MACHAROLI

Prosecretarios:

Señor JUAN J. CANALS, señor JOSE D. CANATA y señor RICARDO N. GUTIERREZ



PRESENTES:

AGÚNDEZ, Jorge A.
 ARANCIO de BELLER, Lylia M.
 AVELÍN, Nancy B.
 BAR, Graciela Y.
 BUSSI, Ricardo A.
 CAFIERO, Antonio F.
 CAPITANICH, Jorge M.
 CAPOS, Liliana D.
 CASTRO, María E.
 COLOMBO de ACEVEDO, María T.
 CONTI, Diana B.
 CURLETTI, Mirian B.
 DANIELE, Mario D.
 ESCUDERO, Sonia M.
 FALCÓ, Luis
 FERNÁNDEZ, Nicolás A.
 GALLEG0, Silvia E.
 GALLIA, Sergio A.
 GIRI, Haide D.
 GIUSTI, Silvia E.
 GIUSTINIANI, Rubén H.
 GÓMEZ DIEZ, Ricardo
 GUINLE, Marcelo A. H.
 IBARRA, Vilma L.
 ISIDORI, Amanda M.
 JAQUE, Celso A.
 JENEFES, Guillermo R.
 LATORRE, Roxana I.
 LEGUIZAMÓN, María L.
 LESCANO, Marcela F.
 LÓPEZ ARIAS, Marcelo E.
 LOSADA, Mario A.
 MARÍN, Rubén H.
 MARINO, Juan C.
 MARTINAZZO, Luis E.
 MARTÍNEZ PASS de CRESTO, Laura
 MASTANDREA, Alicia E.
 MAYANS, Miguel A.

MAZA, Ada M.
 MENEM, Eduardo
 MERA, Mario R.
 MIRANDA, Julio A.
 MORALES, Gerardo R.
 MÜLLER, Mabel Hilda
 NEGRE de ALONSO, Liliana T.
 OVIEDO, Mercedes M.
 PAZ, Elva A.
 PERCEVAL, María C.
 PICHETTO, Miguel A.
 PINCHETTI de SIERRA MORALES, Delia N.
 PRADES, Carlos A.
 REUTEMANN, Carlos A.
 RÍOS, Roberto F.
 ROSSI, Carlos A.
 SAADI, Ramón E.
 SALVATORI, Pedro
 SÁNCHEZ, María D.
 SANZ, Ernesto R.
 TAFFAREI, Ricardo C.
 TERRAGNO, Rodolfo H.
 URQUÍA, Roberto D.
 YOMA, Jorge R.
 ZAVALÍA, José L.

AUSENTES CON AVISO:

CAPARRÓS, Mabel L.
 MASSONI, Norberto
 OCHOA, Raúl E.
 PUERTA, Federico R.
 SAPAG, Luz M.

EN COMISIÓN:

CASTILLO, Oscar A.
 FERNÁNDEZ de KIRCHNER, Cristina E.

LICENCIA POR ENFERMEDAD:

MARTÍN, Floriana N.

SUMARIO

1. Izamiento de la **bandera nacional** en el mástil del recinto. (Pág. 15.)
2. **Homenaje al natalicio de Eva Duarte de Perón.** (S.-1.216/04). Se aprueba. (Pág. 15.)
3. **Homenaje a la tripulación del Crucero "General Belgrano"** (S.-1.189 y 1.084/04). Se aprueba. (Pág. 16.)
4. **Asuntos entrados - Mensajes solicitando acuerdos.** (Pág. 18.)
5. **Lectura del plan de labor.** (Pág. 18.)
6. **Consideración del dictamen de la Comisión de Población y Desarrollo Humano en el proyecto de declaración de la señora senadora Conti** por el que se **declara de interés** el libro *Discriminación de género y educación en la Argentina contemporánea* (S.-1.909/03). Se aprueba. (Pág. 23.)
7. **Consideración del dictamen de la Comisión de Población y Desarrollo Humano en el proyecto de declaración de la señora senadora Curletti** por el que se **declara de interés cultural y educativo la creación de la Casa del Universitario Indígena**, a través del proyecto Atinchik, iniciativa del programa solidario de la Asociación SER, Servicios a los Emprendimientos Regionales (S.-2.174/03). Se aprueba. (Pág. 24.)
8. **Consideración del dictamen de la Comisión de Población y Desarrollo Humano en el proyecto de declaración de la señora senadora Conti** por el que se **declaran de interés parlamentario las Jornadas sobre Sexualidad y Discapa-**

- municación del señor senador Salvatori** por el que se **solicita la implementación de medidas tributarias para promover actividades económicas en Cutral-Có y Plaza Huincul**, provincia del Neuquén (S.-726/04). Se aprueba. (Pág. 78.)
53. **Consideración del dictamen de la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable en el proyecto de declaración de los señores senadores Pinchetti de Sierra Morales y Bussi** por el que se **manifiesta beneplácito por el ingreso de la ciudad de Tucumán al programa ambiental GEO** (S.-549/04). Se aprueba. (Pág. 80.)
54. **Consideración del dictamen de la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable en el proyecto de declaración del señor senador Falcó** por el que se **declara de interés científico y técnico el I Congreso Latinoamericano de Biotecnología de Algas** (S.-504/04). Se aprueba. (Pág. 81.)
55. **Tratamientos sobre tablas acordados.** (Pág. 83.)
56. **Consideración de las modificaciones introducidas por la Cámara de Diputados en el proyecto de ley que le fuera pasado en revisión modificando los artículos 13, 14 y 15 del Código Penal respecto de delitos sexuales y la creación de fiscalías de distrito** (S.-40 y 793/04; C.D.-6 y 8/04). Se aprueba. (Pág. 86.)
57. **Consideración sobre tablas del proyecto de comunicación de la señora senadora Lescano** por el que se **solicita la realización de las campañas de difusión y esclarecimiento sobre la explotación laboral de menores** (S.-629/04). Se aprueba. (Pág. 124.)
58. **Consideración sobre tablas del proyecto de declaración del señor senador Falcó** por el que **adhiera al 150º aniversario de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires** (S.-1.195/04). Se aprueba. (Pág. 126.)
59. **Manifestaciones.** (Pág. 128.)
60. **Consideración sobre tablas del proyecto de comunicación del señor senador Saadi** por el que se **solicita al Poder Ejecutivo nacional el cumplimiento a lo establecido en la ley 25.269**, sancionada el 28 de junio de 2000, respecto de la puesta en funcionamiento de las cámaras federales de apelaciones (S.-744/04). Se aprueba. (Pág. 128.)
61. **Consideración sobre tablas del proyecto de declaración del señor senador Urquía y otros** senadores por el que se **declara de interés la cuarta edición de la Exposición de la**
- Industria Lechera “Mercoláctea”,** a realizarse en mayo del corriente año en la provincia de Córdoba (S.-1.217/04). Se aprueba. (Pág. 130.)
62. **Consideración del dictamen de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en el proyecto de ley del señor senador Jeneffes** por el que se **declara Capital Nacional de la Juventud y sede permanente de la Fiesta Nacional de los Estudiantes a la provincia de Jujuy** (S.-2.789/03). Se aprueba. (Pág. 131.)
63. **Moción de preferencia para la próxima sesión solicitada por los señores senadores Losada, Conti y otros señores senadores sobre suspensión de dictado de leyes secretas** (S.-1.202, 1.212 y 1.179/04). Se aprueba. (Pág. 134.)
64. **Moción de preferencia para la próxima sesión solicitada por el señor senador Agúndez en el proyecto de ley por el que se declara la intervención federal a la provincia de San Luis en su Poder Judicial** (S.-802/04). (Pág. 134.)
65. **Manifestaciones.** (Pág. 135.)
66. **Moción de preferencia para la próxima sesión solicitada por los señores senadores Menem y Perceval en los proyectos de declaración por los que se repudian las torturas cometidas en Irak por las tropas estadounidenses** (S.-1.222 y 1.240/04). Se aprueba. (Pág. 135.)
67. **Moción de preferencia para la próxima sesión solicitada por la señora senadora Avelín y otros señores senadores en el proyecto de comunicación por el que se insta a la Cámara de Diputados a que insista en la sanción del artículo 57 de la ley 25.827, de presupuesto 2004 sobre pensiones graciables** (S.-874/04). Se aprueba. (Pág. 139.)
68. **Moción de preferencia para la última semana de mayo solicitada por el señor senador Morales en el proyecto de ley sobre el aumento salarial para empleados públicos** (S.-1.230/04). Se aprueba. (Pág. 141.)
69. **Moción de preferencia para la próxima sesión solicitada por la señora senadora Mastandrea en el proyecto de ley por el que se modifica la ley 11.683 (procedimiento tributario) en relación al cobro judicial de tributos** (S.-209/04). (Pág. 141.)
70. **Moción de preferencia para la próxima sesión solicitada por la señora senadora Maza en el proyecto de ley del Poder Ejecutivo nacional por el que se establecen los derechos en los establecimientos de salud durante el proceso de nacimiento** (P.E.-3/04 y S.-220/04). (Pág. 141.)

77. Apéndice:

FUNDAMENTOS

- I. **Votaciones.** (Pág. 393.)
 II. **Sanciones del Honorable Senado.** (Pág. 405.)
 III. **Inserciones.** (Pág. 409.)

—En Buenos Aires, a las 16 y 34 del miércoles 5 de mayo de 2004:

Sr. Presidente (Guinle). — Queda abierta la sesión.

1

IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL

Sr. Presidente (Guinle). — Invito al señor senador por La Rioja doctor Jorge Yoma a izar la bandera nacional en el mástil del recinto y a los presentes a ponerse de pie.

—Puestos de pie los presentes, el señor senador Yoma procede a izar la bandera nacional en el mástil del recinto. (*Aplausos.*)

2

HOMENAJE AL NATALICIO DE EVA DUARTE DE PERÓN

Sr. Presidente (Guinle). — En la reunión de labor parlamentaria realizada ayer se acordó rendir homenaje al natalicio de doña María Eva Duarte de Perón.

Por Secretaría se dará lectura a un proyecto de declaración sobre este tema que tuvo ingreso en esta Cámara.

—El texto es el siguiente:

Proyecto de declaración

El Senado de la Nación

DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del natalicio de María Eva Duarte de Perón, "Evita", a recordarse el 7 de mayo.

Ada M. Maza. — Laura M. Pass de Cresto. — Graciela Y. Bar. — Elva A. Paz. — María L. Leguizamón. — Ilaidé D. Girt. — Mercedes M. Oviedo. — Silvia F. Gallego. — Michel H. Müller. — María F. Castro. — Sonia M. Escudero. — Roberto D. Urquía. — María C. Perceval. — Sergio V. Gallia.

Señor presidente:

Hace 85 años, el 7 de mayo de 1919, en Los Toldos, provincia de Buenos Aires, nacía una mujer que vendría a revolucionar, acompañando al general Perón, una sociedad estratificada donde había ciudadanos y ciudadanas sin derechos sociales y políticos.

Hoy nos encontramos aquí, recordando ese aniversario, y no podemos menos que preguntarnos si esta vez, el o los homenajes, se agotarán en algo más que cumplir una liturgia que tal vez no se condice con las nuevas circunstancias que vive nuestra patria.

Y esta reflexión viene a cuento porque en estos tiempos que nos toca vivir como dirigentes, nuestras asignaturas pendientes en esa lucha por la justicia social de la cual ella fuera abanderada, pareciera que se hubieran incrementado. Y si así no fuera, está la sensación de que existe en importantes sectores de nuestra comunidad y que nos lleva a replantearnos sobre lo que nos falta por hacer. Acertar en estas cuestiones y trabajar para contribuir a solucionarlas es una forma de homenaje permanente más allá de esa liturgia propia de un día del calendario.

Porque también es cierto que los tiempos hoy son diferentes y nos encontramos con una realidad donde confluyen los viejos y los nuevos males que aquejan a nuestras sociedades. A los ya conocidos como la pobreza, el desempleo, el hambre, debemos agregar, entre otros, la violencia urbana, el desarraigo forzado, la exclusión social, el fenómeno del narcotráfico y la cuestión del deterioro del medio ambiente; y para librar estas nuevas, y a la vez viejas batallas, necesitamos de nuevas respuestas, por mejorar la calidad de vida de todos los habitantes de estas tierras.

Y nos encontramos también con un reclamo de la sociedad de avanzar en la reforma del sistema político que significara cambios en el sistema de representación, en la distribución del poder entre las provincias con la Nación; de éstas entre sí, y entre los distintos grupos de intereses que componen la sociedad, y si pretendemos estar a la altura de las circunstancias como lo supo estar Eva Perón, debemos encarar decididamente esos cambios que la sociedad reclama.

Y en estas necesarias transformaciones creemos que los derechos políticos de la mujer deben salir fortalecidos y esta afirmación no la hacemos desde una perspectiva de enfrentamiento a los hombres, ya que si así sucediera estaríamos equivocando el rumbo. Lo hacemos basadas en la convicción de que es una consecuencia de nuestro avance objetivo desde el mundo familiar al mundo del trabajo, al de la acción comunitaria y al del compromiso político, entendiendo este accionar, no necesariamente

Nancy Avelín de Ginestar y el senador Luis Falcó, por el cual se rinde homenaje a los 323 héroes que ofrendaron su vida en el crucero "General Belgrano", hundido el 2 de mayo de 1982 durante la guerra de Malvinas.

Sin otro particular, saludo a usted con mi consideración más distinguida.

Nancy Avelín de Ginestar. – Carlos A. Rossi. – Luis Falcó.

Sr. Presidente (Guinle). – Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

–La votación resulta afirmativa.

–En particular es igualmente afirmativa.

Sr. Presidente (Guinle). – Queda aprobada la resolución. Se procederá en consecuencia.

Tiene la palabra el senador Daniele.

Sr. Daniele. – Señor presidente: solicito la inserción del discurso en cuanto al homenaje al crucero "General Belgrano".

Sr. Presidente (Guinle). – Tiene la palabra la señora senadora Avelín.

Sra. Avelín. – Solicito la inserción de mi discurso.

Sr. Presidente (Guinle). – Se van a votar los pedidos de inserción formulados por los señores senadores Daniele y Avelín.

–La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Guinle). – Se procederá en consecuencia.¹

4

ASUNTOS ENTRADOS MENSAJES SOLICITANDO ACUERDOS

Sr. Presidente (Guinle). – En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 187 del reglamento, la Presidencia informa que se ha dado cuenta en el sitio Intranet de la lista de asuntos ingresados hasta la fecha, a efectos de que eventualmente los señores senadores se sirvan formular las manifestaciones que estimen pertinentes.

Sin perjuicio de ello y en virtud de lo establecido por el artículo 22 del reglamento, por Secretaría se procederá a dar lectura a los men-

sajes remitidos por el Poder Ejecutivo nacional solicitando prestar diversos acuerdos por parte de esta Honorable Cámara.

Sr. Secretario (Estrada). – Mensaje número 527/04 para designar juez de Cámara en el Tribunal Oral en lo Criminal N° 2 de la Capital Federal a la doctora Mónica Nidia Atucha.

Mensaje 526/04 para designar juez de Cámara en el Tribunal Oral en lo Criminal N° 1 de la Capital Federal al doctor Luis Roberto José Salas.

Sr. Losada. – Pido la palabra, señor presidente.

Sr. Presidente (Guinle). – Tiene la palabra el señor senador Losada.

Sr. Losada. – Señor presidente: solicito que se reserve en mesa el proyecto de ley de mi autoría contenido en el expediente S.-1.202/04, que figura en la página 28 de los asuntos entrados, para hacer algunas consideraciones al respecto en el momento de tratarse las preferencias.

Sr. Presidente (Guinle). – Así se hará, señor senador.

5

PLAN DE LABOR

Sr. Presidente (Guinle). – Obra en las bancas el plan de labor aprobado en el plenario de labor parlamentaria celebrado en el día de ayer.

–El texto es el siguiente:

PLAN DE LABOR PARLAMENTARIA PARA LA SESION DEL DIA 5-05-2004

Consideración en conjunto de los órdenes del día con proyectos de comunicación, resolución o declaración que por Secretaría se enunciarán.

Tratamiento sobre tablas acordados:

–Corresponde considerar las modificaciones introducidas por la Honorable Cámara de Diputados al proyecto de ley que le fuera pasado en revisión modificando los artículos 13, 14 y 15 del Código Penal respecto de delitos sexuales (S.-40 y 793/03).

–Proyecto de ley venido en revisión modificando el Código Penal en lo que respecta a incrementar penas para homicidas y violadores (C.D.-6/04).

–Proyecto de ley venido en revisión sobre creación de Fiscalía de distrito en el territorio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (C.D.-8/04).

–Proyecto de comunicación de la senadora Lescano solicitando la realización de una campaña de difusión y esclarecimiento sobre la explotación laboral de menores (S.-629/04).

–Proyecto de declaración del senador Falcó adhiriendo al 150° aniversario de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires (S.-1.195/04).

–Asuntos que hayan sido reservados en mesa.

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde proceder a su votación.

Tiene la palabra la senadora Conti.

Sra. Conti. – Señor presidente: no sé si este es el momento oportuno, pero quiero hacer valer la preferencia no acordada respecto del tratamiento de dos proyectos. Uno de ellos es de ley, para que hagan públicas las leyes secretas; y el otro de resolución, por el que se solicita que tras el dictamen de la Comisión de Asuntos Constitucionales se le pida al Ejecutivo que nos remita la ley secreta que está siendo esgrimida por los testigos que declaran en el juicio contra María Julia Alsogaray por enriquecimiento ilícito.

Lo dejo sobre el escritorio para que se tenga en cuenta el pedido de preferencia.

Sr. Presidente (Guinle). – Queda reservado en mesa, señora senadora.

Tiene la palabra el señor senador Jeneffes.

Sr. Jeneffes. – Tengo entendido también que se ha convenido que se trate un proyecto de ley por el que se declara a Jujuy como Capital Nacional de la Juventud y sede permanente de la Fiesta Nacional de los Estudiantes. Solicito que se incluya para ser tratado en esta sesión.

Sra. Müller. – Ya tiene Orden del Día N° 244/04.

Sr. Pichetto. – Tiene orden del día.

Sr. Presidente (Guinle). – En realidad, el señor senador Jeneffes está pidiendo la modificación del plan de labor.

Sr. Pichetto. – Sí, señor presidente.

Sr. Presidente (Guinle). – Se va a votar el plan de labor con la modificación solicitada por el señor senador Jeneffes...

Sr. Menem. – Pido la palabra.

Sr. Presidente (Guinle). – Tiene la palabra el senador Menem.

Sr. Menem. – Señor presidente: solicito que se incluya para ser tratado sobre tablas un proyecto de declaración de mi autoría por el que se

repudian las torturas que están recibiendo ciudadanos iraquíes en las cárceles de Bagdad y otros lugares de ese país.

Es un tema de una tremenda y espantosa actualidad, diría, del cual se han hecho eco todos los medios. Ha sido reconocido por los propios Estados Unidos en la persona del presidente Bush y también por el premier británico Tony Blair. Está en todas las cadenas. Las fotos son espeluznantes. Creo que este Senado no puede dejar de tratar este tema.

Juntamente, pediría que se trate un proyecto anterior referido a condiciones inhumanas a las que están sometidos los prisioneros en Guantánamo. Como estos proyectos se refieren a una materia similar, pido que se traten en forma conjunta, el primero sobre tablas porque no tiene dictamen. El segundo sí tiene dictamen de comisión.

Sr. Presidente (Guinle). – Vamos por temas.

En primer lugar, se va a tratar la modificación del plan labor para incluir el proyecto que citó el senador Jeneffes.

Se va a votar.

–La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Guinle). – Aprobado.

Sr. Pichetto. – Quiero hablar sobre el otro tema.

Sr. Presidente (Guinle). – Tiene la palabra el senador Pichetto.

Sr. Pichetto. – ¿La senadora Avelín está pidiendo la palabra por este tema?

Sra. Avelín. – No.

Sr. Pichetto. – Señor presidente: sabemos de la preocupación permanente del senador Menem sobre esta grave cuestión que está conmoviendo a la opinión pública, que es la práctica de torturas por parte del ejército de Estados Unidos en Irak. También está la denuncia que el senador formuló oportunamente con respecto a la violación de derechos humanos en Guantánamo, en donde se encuentran detenidos sin juicio ciudadanos de Afganistán presuntamente vinculados con Al-Kaeda. Además hay otros hechos de violación de derechos humanos en otros lugares del mundo que merecen el repudio de este Senado, cuerpo que ha sido siempre un espacio de rechazo a la tortura y a la violación de cualquier derecho humano. De manera

que compartimos plenamente el fondo de la cuestión.

Por lo expuesto, nos queremos comprometer a tratar este proyecto con un dictamen rápido de la Comisión de Relaciones Exteriores. Pero tengamos en cuenta que esta casa también es política. Creo que las cuestiones de oportunidad, tiempo y lugar –todos saben a qué me estoy refiriendo– nos indican que el Senado tiene que ser el espacio de la prudencia, de la inteligencia y de la responsabilidad institucional.

Con estas palabras, nos comprometemos a considerar este tema la semana que viene, con un tratamiento previo en el ámbito de la Comisión de Relaciones Exteriores.

Sr. Presidente (Guinle). – Tiene la palabra el senador Losada.

Sr. Losada. – Señor presidente: tenemos que seguir alguna cronología porque yo pedí que se reserve en mesa un proyecto incluido en los asuntos entrados. En su momento se van a tratar las preferencias de proyectos que ingresaron con anterioridad o los pedidos de tratamientos sobre tablas. No tenemos un mecanismo que nos permita incluir en el plan de labor las solicitudes a tratar, dado que el bloque oficialista no está de acuerdo en que se transcriban en el acta. En algún momento tenemos que expresar qué vamos a solicitar, se apruebe o no. Me parece que estamos adelantándonos a esa otra etapa. En efecto, pareciera que la aprobación del plan de labor impide el tratamiento de temas sobre tablas o de preferencias con posterioridad. Yo creo que no debe ser así, como lo afirma con un gesto el secretario. Nosotros consideramos que la aprobación del plan de labor no impide después el tratamiento sobre tablas, cuando llegue el momento.

Entonces, lo único que estamos pidiendo en este momento es que proyectos incluidos en la lista de asuntos entrados de hoy puedan ser reservados en mesa para su tratamiento con posterioridad. Después viene la cronología de los tratamientos sobre tablas solicitados, sobre lo cual se estará o no de acuerdo. Adelanto que la posición de nuestro bloque es apoyar el pedido de tratamiento sobre tablas formulado por el senador Menem.

Sr. Presidente (Guinle). – El plan de labor ha sido votado con la modificación propuesta por el senador Jeneffes.

Los proyectos a que hicieron mención los señores senadores Losada y Menem quedan reservados para su oportuno pedido de tratamiento sobre tablas.

Tiene la palabra el señor senador Saadi.

Sr. Saadi. – Señor presidente: desearía agregar a los diversos pedidos de tratamiento sobre tablas una iniciativa que es importante y fundamental, máxime que hoy los argentinos –los legisladores entre ellos– estamos abocados a buscar la forma de combatir la inseguridad. Desde luego que comprendemos que esa problemática no se agota con dictar leyes, sino que requiere otra serie de medidas que hoy están siendo previstas por el Poder Ejecutivo.

En el marco del funcionamiento de la Justicia desearía que se agregue el tratamiento de un proyecto de comunicación por el que sus autores planteamos la puesta en funcionamiento de las cámaras federales de apelación, norma que ya fuera aprobada en junio de 2000 y por la que se previó la creación de 17 cámaras o tribunales federales en distintas provincias argentinas.

Se trata de un proyecto de comunicación que exige la puesta en funcionamiento en forma inmediata y que no se los limite a ser tribunales orales en lo penal y en lo correccional, sino que también posean jurisdicción en todos los ámbitos propios de un juzgado federal. Por ejemplo, en mi provincia, todo lo que no signifique una acción de índole penal pasa a la Cámara de Tucumán, con los gastos y demoras que ello conlleva.

Por estas razones, solicito que se incorpore el mencionado proyecto en el punto “Tratamientos sobre tablas a solicitar”.

Sr. Presidente (Guinle). – Su proyecto está reservado en mesa y, además, incluido en el punto “Tratamientos sobre tablas a solicitar”.

Tiene la palabra la señora senadora Avelín y luego el señor senador Morales y por último el señor senador Urquía.

Sra. Avelín. – Señor presidente: como parto el criterio de la Presidencia en cuanto a la oportunidad para plantear temas, solicito para el momento oportuno la inclusión y tratamiento sobre tablas de un proyecto de comunicación de un gran contenido social.

Me refiero a un proyecto contenido en el expediente S.-874/04 por el que se insta a la Cámara de Diputados a que insista en la sanción del artículo 57 de la ley 25.827 (presupuesto 2004) sobre pensiones graciables. Se trata de alertar al Poder Ejecutivo sobre una inequidad muy grande que se ha producido para con el sector de los pensionados graciables porque ha quedado separado de cualquier tipo de incremento y, al haber gracias a Dios un nuevo aumento, se podría dar un nuevo error al dejarlos de lado una vez más.

Dejo sentado que se trata de pensiones graciables de montos mínimos -97, 100 y 150 pesos- que quedarían sin ningún incremento si, previamente, la Cámara de Diputados no insiste con el texto de un artículo de la ley de presupuesto.

Solicito el tratamiento para profundizar en esa cuestión.

Sr. Presidente (Guinle). - Señora senadora: la iniciativa se encuentra reservada en mesa.

La Presidencia recuerda que esta es la instancia de pedido de reserva en mesa de los proyectos cuyo tratamiento sobre tablas será solicitado oportunamente.

Tiene la palabra el señor senador Morales.

Sr. Morales. - Señor presidente: solicito la reserva en mesa del expediente S.-1.230/04.

Se trata de un proyecto de ley que, si bien fue ingresado una vez finalizado el momento para la inclusión de proyectos a ser tratados en el día de la fecha, la Secretaría lo tiene en su poder y cuyo pedido de reserva dejo formulado para luego hacer la moción de tratamiento con despacho de comisión.

Sr. Presidente (Guinle). - Así se hará, señor senador.

Tiene la palabra el señor senador Urquía.

Sr. Urquía. - Señor presidente: simplemente por cuestiones de tiempo ruego que se reserve para su posterior tratamiento sobre tablas el proyecto contenido en el expediente S.-1.217 del presente año, por el que se declara a la feria láctea más importante del Mercosur de interés de este Honorable Cuerpo.

Dicha feria comienza mañana y finaliza el próximo domingo, razón por la cual -reiterando mis disculpas por el apuro- pido su tratamiento en esta sesión.

Sr. Presidente (Guinle). - Queda reservado. Tiene la palabra la señora senadora Curletti.

Sra. Curletti. - Señor presidente: pido que se reserve el proyecto contenido en el expediente S.-209/04, de los señores senadores Mastandrea, Agúndez y quien habla.

Sr. Presidente (Guinle). - Queda reservado. Tiene la palabra el señor senador Giustiniani.

Sr. Giustiniani. - Señor presidente: no me quedó claro lo siguiente.

Comparto los dos proyectos mencionados, es decir, tanto el referido a Guantánamo como el referido a las torturas cometidas contra prisioneros iraquíes. Me parece que han sido un escándalo mundial.

Sin embargo, el proyecto sobre Guantánamo cuenta con dictamen de comisión -del 28 de abril-, mientras que el referido a los prisioneros iraquíes no; y no entendí si el bloque de la mayoría está planteando un compromiso para tratar el tema de los prisioneros iraquíes, con dictamen de comisión.

Creo que hay coincidencia total en este cuerpo en repudiar estos hechos; solamente será cuestión de ver los términos de la declaración del Senado. Pero creo que ambas situaciones son diferentes porque el proyecto sobre Guantánamo -reitero- tiene dictamen de comisión del 28 de abril, mientras que el otro no.

Entonces, estoy a favor de un pronunciamiento del Senado sobre ambas cuestiones, pero quiero que se clarifique la situación planteada al respecto.

Sr. Presidente (Guinle). - Señor senador Giustiniani: el proyecto reservado en mesa es el que pidió el señor senador Menem.

¿Usted desea formular alguna otra petición?

Sr. Giustiniani. - No; sólo quería tener una aclaración en ese sentido.

Sr. Presidente (Guinle). - El proyecto que está reservado es la solicitud formulada por el señor senador Menem con relación a las torturas en Irak...

Sr. Giustiniani. - Lo de Guantánamo también se planteó...

Sr. Presidente (Guinle). - En realidad, se planteó pero no quedó reservado en mesa. Por eso le consulté si quería formular alguna petición.

Sr. Giustiniani. – Entonces, quisiera que se reserve también el proyecto sobre Guantánamo.

Sr. Presidente (Guinle). – Así se hará.

¿Tiene el número de expediente de ese proyecto, señor senador?

Sr. Giustiniani. – Es el S.-3.525/03; se trata de un proyecto de declaración.

Sr. Presidente (Guinle). – Tiene la palabra el señor senador Menem.

Sr. Menem. – Señor presidente: quiero aclarar lo siguiente.

Yo pedí el tratamiento sobre tablas del proyecto vinculado con Irak y que se agregue el de Guantánamo, porque ambos tienen conexión. Prácticamente, se refieren a la misma materia; sólo cambia el lugar de las torturas. Y solicito también que se agregue, como pidió el señor senador Giustiniani, el proyecto sobre Guantánamo, que ya tiene dictamen de comisión.

De todos modos, como ya hubo aquí un adelantamiento de posición al respecto por parte del presidente de mi bloque, sin entrar a discutir ni polemizar sobre esta cuestión, quiero dejar aclarado lo siguiente.

En este recinto algunos piensan que un planteo de esta naturaleza implica manifestar una posición en contra de los Estados Unidos. Sin embargo, esto está lejos de mi ánimo; quiero que quede claro.

Digo esto también para que se reflexione y se llegue a tratar este tema hoy, porque de lo contrario creo que sería una situación desairada frente a la posición que han venido sosteniendo este Senado, nuestro país y el propio presidente de la Nación con relación a la defensa de los derechos humanos.

Ahora, si las torturas en Irak han sido reconocidas y repudiadas por el presidente de los Estados Unidos y por el premier británico –perteneciente a otra de las fuerzas invasoras–; si han sido reconocidas por las Naciones Unidas, en cuyo ámbito se está investigando; si el Senado de los Estados Unidos ha formado una comisión y que está investigando; digo, ¿no estaremos queriendo ser más papistas que el Papa al decir que vamos a quedar mal con Estados Unidos? Al contrario, ratificamos una línea de defensa de los derechos humanos. Y aun cuando esté el presidente argentino en los Estados Unidos, esto no crea ninguna situación incó-

moda; al contrario, va a quedar demostrado que el Parlamento, como guardián de los derechos humanos, sigue una política de defensa de los derechos humanos, sin importar quién sea el infractor. Lo que importa es la defensa de la dignidad humana.

Hago esta aclaración porque no quisiera que esto se inscriba en una disputa de si se está a favor o en contra de los Estados Unidos. Si los propios responsables están reconociendo el hecho y están por aplicar sanciones, no creo que una sanción del Senado que está en línea con las que venimos produciendo desde hace mucho tiempo vaya a afectar nada a nadie.

Sr. Presidente (Guinle). – Están los dos temas reservados en mesa.

Tiene la palabra el senador Pichetto.

Sr. Pichetto. – Señor presidente: lo reitero, para aclarar la duda al senador Giustiniani. Repudiamos toda forma de tortura o violación a los derechos humanos. Esto no está en discusión. Sostenemos que es un tema que vamos a tratar la semana que viene. Y creo que también el tema cubano hay que analizarlo en todo el abordaje, porque están pendientes en el ámbito de la comisión denuncias de violaciones sistemáticas a los derechos humanos también hechas por el actual régimen político de Fidel Castro.

Entonces, analicemos todo. Que la Comisión de Relaciones Exteriores saque todos los dictámenes respectivos. Y repito: consideramos que esto debe tener dictamen. Vamos a tratar este tema la semana que viene –Guantánamo, Cuba, Irak, etcétera.–. Hoy no estamos en condiciones de hacerlo.

Sr. Presidente (Guinle). – Tiene la palabra la señora senadora Ibarra.

Sra. Ibarra. – Señor presidente: creo que son temas importantes en los que tenemos que pronunciarnos. Podríamos tomar el compromiso de tratarlos efectivamente la semana que viene. Y sugiero que se haga en reunión conjunta de las comisiones de Relaciones Exteriores y de Derechos Humanos, porque me parece que esta última tiene directa injerencia en este tema.

Coincido con que tenemos que hacer un repudio sobre estos temas; son cuestiones en las que tenemos que analizar cuáles son los organismos internacionales que intervienen, las materias de derechos humanos, los tratados que

tenemos ratificados y demás; sugiero tomar el compromiso de tratarlos la semana que viene y también de darle intervención a la Comisión de Derechos Humanos.

Sr. Presidente (Guinle). – Al tratar las preferencias lo vamos a considerar.

Tiene la palabra la señora senadora Perceval.

Sra. Perceval. – Señor presidente: esta mañana justamente, trabajando en la Comisión de Derechos y Garantías, se hizo esta moción concreta. Inclusive, van a encontrar, tal cual sugerí a los secretarios de la comisión, que pidieron el giro a la Comisión de Derechos y Garantías, porque no puede quedar desvitalizada ni ausente en el tratamiento y acompañamiento de la defensa irrestricta y universal de los derechos humanos.

Quiero decir que esta mañana lo tratamos en la comisión y hemos pedido también el giro a la Comisión de Derechos y Garantías. Y coincido con la senadora Ibarra en la necesidad de la participación de esta comisión.

6

DISCRIMINACION DE GENERO Y EDUCACION EN LA ARGENTINA CONTEMPORANEA

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar en conjunto los órdenes del día con proyectos de comunicación, resolución y declaración sin observaciones que por Secretaría se enunciarán, sin perjuicio de que en el Diario de Sesiones figuren como de costumbre.

En primer lugar, el dictamen de la Comisión de Población y Desarrollo Humano en el proyecto de declaración de la señora senadora Conti por el que se declara de interés el libro *Discriminación de género y educación en la Argentina contemporánea* (Orden del Día N° 185).

–El texto es el siguiente:

Dictamen de comisión

Honorable Senado:

Vuestra Comisión de Población y Desarrollo Humano ha considerado el proyecto de declaración de la señora senadora nacional doña Diana Conti, declarando de interés el libro *Discriminación de género y educación en la Argentina contemporánea*; y, por las razones que dará el miembro informante, recomienda la aprobación.

De acuerdo con las disposiciones pertinentes del Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa directamente al orden del día.

Sala de la comisión, 10 de marzo de 2004.

Antonio F. Cafiero. – Lyliá M. Arancio de Beller. – Diana B. Conti. – Graciela Y. Bar. – María E. Castro. – Sonia M. Escudero. – Amanda M. Isidori. – Delia N. Pinchetti de Sierra Morales.

Proyecto de declaración

El Senado de la Nación

DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el libro *Discriminación de género y educación en la Argentina contemporánea*, coedición del Instituto Nacional contra la Discriminación (INADI) y del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), de varios autores y compilado por Eleonor Faur y Cecilia Lipszyc.

Diana B. Conti.

FUNDAMENTOS

Señor presidente:

La vinculación entre los procesos culturales discriminatorios contra la mujer y la realidad educativa que vive la sociedad constituye un núcleo teórico central en la temática de los estudios de género.

El libro objeto de este proyecto de declaración la aborda con un enfoque multifacético y en un alto nivel de solvencia teórica y acuciosidad investigativa, por lo que está llamado a convertirse en material de consulta imprescindible para el estudioso y el ámbito académico.

Tal como se afirma en el prólogo: “La discriminación de las niñas, adolescentes y mujeres se inscribe en registros muchas veces demasiado profundos e invisibles; por lo tanto su prevención requiere procesos de formación, manejo de conceptos y estrategias novedosas para alcanzar su superación”.

En relación con esta afirmación, tal vez no sea errado aseverar también que otro de los méritos visibles de la obra reside en que, de manera coincidente entre sus distintas áreas temáticas, advierte sobre la necesidad de avanzar más allá del plano retórico para concretar acciones prácticas que posibiliten una lucha eficaz contra el prejuicio como núcleo ideológico de la actitud discriminatoria.

Los tratados internacionales brindan un marco normativo protectorio que regula las relaciones sociales en esta materia promoviendo, con la fuerza que surge del carácter heterónomo de la norma jurídica, la igualdad, la equidad y la no discriminación. Pero el plano del deber ser en que se mueve el precepto debe alcanzar su concreción práctica en la actividad de los actores que luchan, día a día, para

Código Penal sobre la exhibición sexual de menores.

S.-616/04, Pichetto y Perceval, proyecto de ley por el que se modifica el artículo 119 del Código Penal, sobre explotación sexual de menores.

S.-794/04, Pichetto, sobre imputabilidad de menores.

S.-2.314/03, Yoma, proyecto de ley sobre juicio por jurados.

S.-324/03, Perceval y otros, proyecto de ley sobre prohibición y prevención del tráfico sexual de menores en el turismo.

S.-143/04, Zavalía, proyecto de comunicación por el que se solicitan informes acerca de la desaparición de explosivos en Azul, provincia de Buenos Aires.

Votados en la sesión del 28 de abril de 2004:

S.-777/04, Marino y otros, proyecto de ley por el que se modifica el Código Penal acerca de delitos cometidos por funcionarios públicos.

S.-2.145/03, Prades, reproduce el proyecto de ley por el que se sustituye el artículo 9º del Código Electoral, respecto del carácter del sufragio en relación a la ley de lemas, y

S.-1.541/03, Curletti, proyecto de ley por el que se crea un registro nacional de compraventa de bienes durables usados, metales y piedras preciosas.

Sr. Losada. – Pido la palabra.

Sr. Presidente (Guinle). – Lo escucho, señor senador.

Sr. Losada. – Señor presidente: quedamos en que todo esto sigue pendiente de tratamiento. No caducan. Se los posterga hasta la próxima sesión, con dictamen de comisión.

Sr. Presidente (Guinle). – Así está votado, señor senador.

Sr. Menem. – Pido la palabra.

Sr. Presidente (Guinle). – Me parece, señor presidente, que hemos perdido mucho tiempo en una discusión.

Creo que en las actas de labor parlamentaria tendría que figurar el tema de las preferencias que no se tratan porque no tienen dictamen. Porque el acta también sirve para informar a todos los señores senadores que no vamos a las reuniones de labor parlamentaria.

De acuerdo con los artículos 143 y 144 del reglamento, la moción de preferencia tiende a fijar una fecha o anticipar el tratamiento de un tema.

Si pido una preferencia, tengo derecho a saber qué ha pasado con ella. Que se me diga que no tiene dictamen, etcétera.

Creo que sería de buena práctica, para evitar estos malos entendidos, que en las actas de labor parlamentaria figure el estado en que están las preferencias. Si no tienen dictamen o si tienen dictamen pero no tienen orden del día. En fin, que sirva también como información.

Sr. Presidente (Guinle). – Gracias, señor senador, por su observación.

56

MODIFICACIONES AL CODIGO PENAL. CREACION DE FISCALIAS

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde la lectura de los tratamientos sobre tablas acordados, que por Secretaría se enunciarán.

Sr. Secretario (Estrada). – (*Lee*). Modificaciones introducidas por la Honorable Cámara de Diputados en el proyecto de ley que le fuera pasado en revisión modificando el artículo 13, 14 y 15 del Código Penal respecto de delitos sexuales, que tiene dictamen de comisión.

Proyecto de ley en revisión por el que se modifica el Código Penal en lo que respecta a incrementar penas para homicidas y violadores. Este proyecto tiene dictamen de comisión.

Finalmente, sin dictamen de comisión, proyecto de ley relativo a la creación de fiscalías de distrito en el territorio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Sr. Pichetto. – Pido la palabra.

Sr. Presidente (Guinle). – Tiene la palabra el señor senador Pichetto.

Sr. Pichetto. – Señor presidente: habíamos hecho un acuerdo. No sé si se mantendrá, porque como cambian el juego a cada rato...

Hay tres temas que tienen que ver con la seguridad pública, vinculados con una tarea de continuidad que está haciendo este Senado, que iban a ser tratados en un debate en general, de manera conjunta. O sea, una sola vez abordamos los tres temas y, luego, una vez que esté aprobado, pasamos a votar cada cuestión en general y en particular.

Es decir que, para el debate, consideremos los tres temas en forma conjunta.

Sr. Presidente (Guinle). – Tiene la palabra el señor senador Agúndez.

Sr. Agúndez. – Señor presidente: efectivamente, vamos a cumplir el acuerdo que enunció el señor presidente del bloque justicialista.

Hoy nosotros teníamos que tratar cuatro proyectos sancionados por la Cámara de Diputados. Finalmente, acordamos postergar para la semana que viene el tratamiento del proyecto de ley en revisión, de modificación del artículo 45 del Código Penal. Eso también formó parte del acuerdo al que hemos arribado. Por consiguiente, en esta sesión vamos a considerar los dos proyectos de ley en revisión de modificación de distintos artículos del Código Penal y el que establece la creación de fiscalías de distrito en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En este último caso, la comisión ha designado a la señora senadora Ibarra para proponer una modificación, por lo que de aprobarse la iniciativa volvería a la Cámara de Diputados.

El tema que a nosotros nos preocupa...

Sr. Presidente (Guinle). – ¿Me permite, señor senador? Antes de que usted comience su exposición, se debe considerar el tratamiento sobre tablas de los tres proyectos mencionados.

Sr. Agúndez. – De acuerdo.

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el tratamiento sobre tablas de los tres proyectos mencionados.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

–La votación resulta afirmativa.

–El texto es el siguiente:

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados...

Artículo 1º – Modifícase el artículo 13 del Código Penal, que quedará redactado de la siguiente manera:

Artículo 13: El condenado a reclusión o prisión perpetua que hubiere cumplido veinte años de condena, el condenado a reclusión temporal o a prisión por más de tres años que hubiere cumplido los dos tercios de su condena y el condenado a reclusión o prisión, por tres años o menos, que por lo menos hubiese cumplido un año de reclusión u ocho meses

de prisión, observando con regularidad los reglamentos carcelarios, podrá obtener la liberación por resolución judicial previo informe de la dirección del establecimiento bajo las siguientes condiciones:

1. Residir en el lugar que determine el auto de soltura.
2. Observar las reglas de inspección que fije el mismo auto, especialmente la obligación de abstenerse de bebidas alcohólicas.
3. Adoptar, en el plazo que al auto determine, oficio, arte, industria o profesión, si no tuviere medios propios de subsistencia.
4. No cometer nuevos delitos.
5. Someterse al cuidado de un patronato indicado por las autoridades competentes.
6. Someterse a tratamiento médico-psicológico previo informe que acredite su necesidad y eficacia.

Estas condiciones regirán hasta el vencimiento del término de las penas temporales, y en las perpetuas hasta cinco años más a contar desde el día de la libertad condicional.

No procederá el beneficio contemplado en el presente artículo cuando se trate de condenados por delitos contemplados en los artículos 119, 120.

Art 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Ricardo A. Bussi – Delia Pinchetti de Sierra Morales.

FUNDAMENTOS

Señor presidente:

Lamentablemente en los últimos días los distintos medios periodísticos han ido recogiendo una sucesión de hechos delictivos, atentatorios a la integridad sexual de las víctimas y en algunos casos seguidos de muerte de la persona ofendida.

Esto, que no es nuevo, encuentra sus razones más profundas, entre otras cosas, en un déficit educacional que hoy a todas luces es imposible de tapar.

Sin embargo y más allá de las políticas estructurales, que pueden y deben llevarse adelante para ir morigerando estas actitudes disvaliosas y antisociales, las circunstancias exigen la búsqueda de remedios que, más allá de combatir las causas eficientes de estas acciones, lleven a sus posibles autores a evaluar la conveniencia de sus conductas sobre la base de sus posibles consecuencias.

En ese orden de ideas, vemos que la ley 25.087 sancionada el 14 de abril de 1999, modificando el

título III del libro segundo del Código Penal, "Delitos contra la integridad sexual", marca un claro cambio de la política legislativa en cuanto a la tipificación de las conductas descritas, receptando el sentir actual de la sociedad.

Igual tendencia encontramos en varios proyectos legislativos según los cuales se propugna la creación de un registro especial donde figuren todos aquellos condenados por delitos contra la integridad sexual.

Todas estas iniciativas tienden a rescatar la necesidad de la comunidad de contar con mecanismos de defensa que permitan en un aspecto adoptar actitudes preventivas de protección y, en otro, frente al hecho consumado, tratar de limitar las posibilidades de que se repitan.

Resulta ya un hecho comprobado la tendencia hacia la reiteración delictiva que evidencian los ofensores sexuales, y así numerosas opiniones profesionales indican que existe una altísima posibilidad de que, por ejemplo, aquellos que cometen delitos sexuales se conviertan en reincidentes.

En esta problemática, la preocupación de las autoridades debe estar dirigida a interrumpir el ciclo que conlleva el abuso sexual, ciclo en que la reincidencia es inevitable por la superficial comprensión de las exigencias del medio que tienen estos individuos, a quienes, en muchos países adelantados, se los denomina predadores con una muy escasa tolerancia a la frustración; poseen una manifestada incapacidad de manejar sus impulsos instintivos, lo que los conduce a una incontenible compulsión a la repetición. Es así que reinciden en un 95% de los casos, según publicaciones recientes. Con sólo recordar la estadística emanada de la Dirección de Política Criminal, que indica que en el 2002 hubo 3.036 violaciones registradas en el país, además de otros 5.772 delitos contra la integridad sexual, concluimos que el problema es verdaderamente serio como para tomar medidas urgentes y de aplicación práctica inmediata.

Por ello, con esta reforma del artículo 13 del Código Penal que estoy proponiendo, tiendo a ver el problema, una vez acaecido, desde un doble punto de vista; por un lado, mediante una actitud de tipo terapéutico, que permita recuperar en lo posible a los individuos de su patología, de ahí la redacción de un nuevo inciso, el 6; y en otro aspecto, limitando las posibilidades de que, por las especiales características psicológicas de quienes incurrir en este tipo de delito, puedan acceder al instituto de la libertad condicional, en la inteligencia de que con ello recuperan su libertad anticipadamente.

Por los motivos expuestos solicito a este cuerpo la aprobación del presente proyecto.

Ricardo A. Bussi – Delia Pinchetti de Sierra Morales.

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...

Artículo 1º – Modifícase el artículo 14 del Código Penal, el que quedará redactado como sigue:

Artículo 14: La libertad condicional no se concederá a los reincidentes. Tampoco se concederá a los condenados por homicidio agravado (artículo 80); lesiones gravísimas agravadas (artículo 92); violación seguida de muerte (artículo 124); robo agravado (artículos 165, 166 y 167); secuestro extorsivo (artículo 170); incendio y otros estragos dolosos (artículos 186, 187, 188 y 189 bis); delitos contra la seguridad de los medios de transporte (artículo 190), y por envenenamiento y adulteración de aguas potables, alimentos y/o medicinas (artículos 200, 201 y 202).

Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Miguel A. Pichetto.

FUNDAMENTOS

Señor presidente:

El presente proyecto es reproducción de mi iniciativa S.-2.238/02, y ha sido desglosado en siete iniciativas diferentes, para facilitar su tratamiento.

En consecuencia, por su actualidad, y por ser comunes a todas las propuestas, paso a reproducir los fundamentos de dicha iniciativa, los que resultan por demás sobreabundantes frente a los hechos públicos y notorios que los argentinos venimos padeciendo en materia de inseguridad:

"Nos encontramos frente a una dramática situación de inseguridad, que nos compele a modificar determinados institutos y normas penales, en bien de la comunidad.

"Institutos y normas penales que fueron modificados a partir de 1984, estableciéndose la tendencia a disminuir el efectivo cumplimiento de la pena, en función de la búsqueda de soluciones resocializadoras, que hoy, a la distancia advertimos, no han sido alcanzadas.

"En ese contexto, el entonces oficialismo también reconoció la necesidad de modificar las normas de procedimiento penal para 'alivianar' la situación carcelaria, modificando también los institutos de la condena condicional, la excarcelación y el régimen de reincidencia, creando un esquema penal absolutamente flexibilizado, un verdadero 'colador', por donde se escapa la vida de los argentinos.

"Aquellos sistemas correctivos en auge en países desarrollados, a los que hicimos referencia, han sido imposibles de aplicar en nuestro país, tal como lo demuestran las circunstancias, por problemas de infraestructura, de personal especializado y, en definitiva, por la falta de una política criminal adecuada.

da, que hubiere garantizado a quienes delinquen una futura reinserción social, y que hubiere protegido a la comunidad en su conjunto, frente a posibles nuevos embates de la delincuencia.

"La realidad de este momento, teñida de actos de crueldad impensable, asesinatos, secuestros extorsivos, ultrajes de toda clase y un vandalismo a ultranza, hace que debamos variar el temperamento, y que nos encaminemos a lograr que el peso de la violencia no recaiga sobre la sociedad, evitando que el ciudadano común tienda a defenderse por mano propia, ante un Estado inoperante.

"Más aún, cuando la sociedad argentina está dando sobrado ejemplo de cordura frente a tanta violencia, al evitar el ciudadano, salvo contadísimos casos, esa defensa por mano propia, y al seguir depositando su confianza en las autoridades para la solución de este tema, que ya se ha convertido en una cuestión de Estado.

"El actual esquema de nuestra normativa penal no nos permite anticiparnos a la violencia.

"Es más, nos inserta en ella.

"Frente a este panorama, y como ya he expresado otras veces, debemos poner especial énfasis en conjugar los intereses de todos los actores: el bien de la comunidad, que necesita de políticas activas en materia de seguridad; las garantías de procesados y condenados, quienes no deben sufrir cercenamientos indebidos en su libertad y quienes poseen el deber y el derecho a permanecer en institutos carcelarios adecuados, con fines de reeducación social, no lanzándolos nuevamente a las calles sin elementos que les permitan hacer frente a su situación y, finalmente, la probidad de la Justicia, en donde nuestros magistrados puedan contar con las mejores alternativas para hacer frente a la lucha contra el delito, dejando de conducirse con laxitud.

"Tenemos un serio problema carcelario, producto de la escasa política carcelaria que se ha venido implementando, con fundamento, algunas veces, en un garantismo mal entendido, no importa a qué costo para la sociedad, y, principalmente, en la confusión ideológica que el problema de la delincuencia común, en nuestro país, trae aparejada.

"Sabemos que en toda comunidad, lo antijurídico depende del criterio de libertad individual o de defensa social que prime en su legislación. Es la sociedad en su conjunto, la que dice qué individuos y qué conductas son aceptadas como normales, y cuáles no lo son.

"Y hoy, los argentinos reclaman y exigen una solución al problema de la inseguridad, sin detenerse en el debate ideológico y anacrónico que tñera nuestras ideas, sobre todo desde el regreso a la democracia.

"Ideología de por medio, no hemos sabido situarnos frente al problema, incurriendo en el error de llevar a la práctica esa idea que expresa que los de-

lincentes, sólo son producto de esa visión parcializada de la realidad que atribuye toda la responsabilidad a la sociedad en la formación de los mismos, y en donde todos somos víctimas, incluidos los victimarios, no existiendo penas ni procedimientos que se atrevan a hacer frente al accionar delictivo. El honesto no se diferencia del corrupto; es más, el honesto debe pagar con su intranquilidad, y hasta con su vida, el hecho de no haber sabido adaptarse a esta postura de algunos sectores que justifican el delito, y en función de la cual todos podemos delinquir, total, en definitiva, vamos a ser comprendidos, apoyados y hasta lanzados a la fama, a través de los medios de comunicación, principalmente, de la televisión.

"Parte de nuestra sociedad actual, enmarcada en un quiebre de los valores tradicionales, lleva como estandarte la falta de límites éticos.

"Pero ello debe servirnos de motivo suficiente y no de justificativo, a la hora de poner en la balanza cuál es el bien jurídico protegido que no debe conculcarse y cuál es la conducta que debe reprocharse, con miras a salvaguardar los derechos de las víctimas y de la sociedad toda.

"Creo que hemos abusado del concepto de la marginalidad.

"Cuando un delincuente es apresado y llevado ante la Justicia en el actual sistema, se pone en marcha una maquinaria judicial donde se juzga al delito, como obrar antijurídico en sí mismo: todavía estamos analizando si delinquir es bueno o es malo, olvidándonos del autor material del hecho, que arrastra consigo elementos de peligrosidad en su accionar, y/o que puede contar con una personalidad altamente peligrosa, escondida tras el estigma 'pobreza = delincuencia', que todo lo justifica.

"Esos criterios de peligrosidad tienen que estar incluidos tanto en normas penales de fondo como en los códigos de procedimiento, pues de lo contrario, la actividad legislativa nunca receptará la realidad imperante y será sólo un reflejo de una situación ideal del legislador.

"Todos quisiéramos vivir en una sociedad sin delito.

"Pero lo concreto es que existe, y a niveles que nos desbordan.

"En esa inteligencia, propongo la presente reforma, en donde nos retrotraemos a los criterios tradicionales de la reincidencia y de la condena de ejecución condicional; se modifica el criterio para gozar de la libertad condicional frente a la comisión de específicos delitos, y se modifica el régimen de salidas transitorias y semilibertad previsto en nuestra normativa sobre ejecución de la pena privativa de la libertad, dejándose de lado el criterio de la buena conducta dentro del penal, que puede llevar a errores en la concesión de esos beneficios, y si poniéndose el acento en el concepto de qué goce el inter-

no, y en la necesidad de que no represente peligro para la sociedad ni para sí mismo, entre otras cosas.

"Todas estas medidas, tomadas de manera conjunta, y junto a otras que he propuesto en el resto de mis iniciativas, en especial, aquellas que hacen a las armas, a la utilización de menores inimputables para delinquir y a la acumulación de las penas, harán que en la Argentina las condenas sean, en los casos que así sea necesario y de una vez por todas, de efectivo cumplimiento.

"Esta reforma de la legislación penal hará que en nuestro país delinquir ya no sea barato, y que podamos diferenciar a quien transgrede esa legislación penal llevado de la mano de la indigencia o de otras situaciones justificantes, del profesional del delito, amparado en la presunta pobreza.

"De qué otra forma, si no, se logra hacer justicia.

"Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la urgente sanción de la presente iniciativa."

Miguel A. Pichetto.

Buenos Aires, 29 de abril de 2004.

Al señor presidente del Honorable Senado.

Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley que paso en revisión al Honorable Senado.

El Senado y Cámara de Diputados,...

Artículo 1º – Sustitúyese el artículo 124 del Código Penal, el que quedará redactado de la siguiente manera:

Artículo 124: Se impondrá reclusión o prisión perpetua, cuando en los casos de los artículos 119 y 120 resultare la muerte de la persona ofendida.

Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.

EDUARDO O. CAMAÑO.
Eduardo D. Rollano.

Buenos Aires, 29 de abril de 2004.

Al señor presidente del Honorable Senado.

Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley que paso en revisión al Honorable Senado

CREACION DE FISCALIAS DE DISTRITO EN EL TERRITORIO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

El Senado y Cámara de Diputados,...

Artículo 1º – Facúltase al procurador general de la Nación establecer fiscalías de distrito en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Art. 2º – En el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las fiscalías de distrito que se establezcan, serán unidades que tendrán a su cargo la investigación de los delitos cometidos en el ámbito territorial de su competencia.

Facúltase al procurador general de la Nación para determinar el ámbito territorial de actuación de las fiscalías de distrito, las cuales tendrán intervención directa y exclusiva en todos los delitos de competencia de la Justicia Nacional en lo Criminal de Instrucción y Correccional de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. A tal fin el procurador general procederá a la reasignación de funciones de las fiscalías correccionales y de instrucción que estime necesario a fin de poner en funcionamiento las citadas fiscalías de distrito.

El procurador general de la Nación, ante delito que por su complejidad y características lo hagan aconsejable, podrá establecer fiscalías especiales que tendrán jurisdicción en todo el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Estarán a cargo de un grupo de fiscales que serán designados mediante concurso interno de oposición y antecedentes entre el plantel de fiscales, a quienes se le asignarán las causas por sorteo.

Art. 3º – Los magistrados que queden a cargo de las fiscalías de distrito serán fiscales de distrito y mantendrán el actual plantel de funcionarios y empleados, según el procedimiento que establezca el procurador. Regirá el principio de la rotación periódica de fiscales entre las fiscalías de distrito creadas, lo cual será determinado por el procurador mediante el dictado de la normativa respectiva. El procedimiento estará a cargo de los fiscales de cámara.

Art. 4º – Dentro de los 180 días de sancionada la presente ley, se dispondrá el efectivo traslado de las fiscalías correspondientes a los barrios de La Boca/Barracas; Devoto/Villa Pueyrredón; Liniers/Villa Luro; Villa Lugano; Mataderos; Villa Soldati; Constitución/Telmo y Nueva Pompeya, para que desarrollen su labor en inmuebles localizados en la jurisdicción de estas fiscalías de distrito, que determinará el procurador.

Por razones fundadas, el procurador podrá también modificar la jurisdicción asignada a las unidades creadas por las leyes 25.748 y 25.749, reduciendo o ampliando el ámbito territorial de su competencia, según la evolución del mapa del delito en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Art. 5º – Para el resto de las fiscalías de distrito, el procurador también determinará la asignación de causas tomando en cuenta el criterio territorial, si bien podrá mantenerlas en sus actuales sedes de radicación, hasta tanto se considere posible y/o conveniente disponer el efectivo traslado. Hasta tanto ello ocurra, el procurador podrá instalar oficinas de distrito con el fin de facilitar un conocimiento más profundo de los problemas delictuales de la zona y un mayor acercamiento a la población y a las fuerzas policiales del lugar.

Art. 6° - El procurador determinará en cada caso la cantidad de fiscales que actuarán en cada fiscalía de distrito debiendo guardar proporción entre la cantidad de fiscales y la cantidad de causas que pudieran ingresar a cada una de ellas.

Reasignará también, siguiendo el criterio proporcional, a los fiscales de juicio ante los tribunales orales en lo criminal que quedarán asignados a las distintas fiscalías de distrito.

Art. 7° - Las fiscalías generales ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, continuarán ejerciendo sus funciones de superintendencia, coordinación y apoyo, fijando criterios generales de actuación.

El procurador podrá adoptar las decisiones convenientes para la distribución de dichas funciones de las fiscalías generales, en relación a las fiscalías de distrito.

Art. 8° - Las causas que se inicien por denuncia ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional y por prevención o denuncia ante las dependencias de la Policía Federal Argentina y las de otras fuerzas de seguridad, se asignarán a la fiscalía de distrito competente según el lugar de comisión del hecho delictivo.

Art. 9° - Las cuestiones que se susciten por conflictos en la asignación de causas entre distritos fiscales que integren zonas diferentes, serán resueltas por el fiscal general ante la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional que se encuentre a cargo de la zona a la que corresponda la fiscalía de distrito que previno.

Los conflictos entre fiscales de una misma fiscalía de distrito, serán resueltos por el fiscal general ante la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional que tenga a su cargo la zona respectiva.

Art. 10. - El gasto que origine la puesta en funcionamiento de las fiscalías de distrito, se atenderá con la afectación de las partidas del presupuesto anual de gastos que se asigne en cada ejercicio.

Art. 11. - El procurador está facultado para concertar con el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el efectivo traslado de las fiscalías de distrito a nuevas sedes y para suscribir los convenios mediante los cuales dicho gobierno efectúe aportes de bienes inmuebles, muebles, equipamiento y recursos monetarios destinados a las fiscalías de distrito.

Art. 12 - Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.

EDUARDO O. CAMAÑO
Eduardo D. Rollano.

En consideración. Tiene la palabra el señor senador Agúndez.

Sr. Agúndez. - El primero de los proyectos de ley en revisión a consideración de este cuerpo tiene que ver con la reformulación de los artículos 13, 14 y 15 del Código Penal. Hace un tiempo atrás -prácticamente treinta días- tratamos el artículo 13, que aborda aquellos delitos considerados doctrinariamente aberrantes y acordamos la prohibición de la libertad condicional para este tipo de ilícitos.

Al respecto, les digo que en esa ocasión fuimos muy claros y concretos y nuestra postura está explicitada en la versión taquigráfica de aquella sesión. En oportunidad de realizarse distintas reuniones en las comisiones de ambas Cámaras con motivo del tratamiento de esta batería de proyectos de reforma al Código Penal sostuvimos que existía la voluntad política de restringir la libertad condicional en el caso de algunos delitos y de eliminarla en otros.

El Senado actuó en esa ocasión como Cámara iniciadora y aquí dijimos que nosotros no tendríamos ningún problema en aceptar lo que propusiera la Cámara de Diputados, si lograba una reformulación mejor y más precisa. Pero la voluntad política estaba destinada a limitar o directamente eliminar la posibilidad de la libertad condicional en algún tipo de delitos, a efectos de no agravar la crisis de inseguridad en nuestro país.

La Cámara de Diputados trató este tema con muy buena predisposición. Al respecto, nosotros habíamos establecido la prohibición de la libertad condicional para el caso de delitos aberrantes en el artículo 13 y aquel cuerpo abordó este tema en el artículo 14 del mismo cuerpo legal.

Concretamente, el texto anterior de dicho artículo establecía que la libertad condicional no se concederá a los reincidentes y allí se agregó que tampoco se concederá para los casos que nosotros habíamos incluido en el artículo 13. Cabe apuntar que en el Senado la prohibición de libertad condicional para los delitos aberrantes se aprobó por 59 votos afirmativos contra uno negativo; y señalo el resultado de la votación por cualquier eventualidad.

O sea que la Cámara de Diputados introdujo una mejor sistematización en orden a este tipo de delitos aberrantes. A su vez, agregó cuál va

a ser el piso para las demás penas de cadena perpetua que existen en el Código Penal. En este caso, todos los incisos menos el 7), respecto del cual ya habíamos establecido la prohibición de otorgar en ese caso la libertad condicional. Asimismo, se elevan los veinte años, que exige ahora la legislación actual, a treinta y cinco, para que a partir de ahí, dadas las condiciones que establece el artículo 13 del Código Penal, pueda recibir el reo la posibilidad de la libertad condicional.

En definitiva, este artículo también lo habíamos aprobado, con la aceptación del inciso 6) —que habla de someterse a tratamiento médico, psiquiátrico y psicológico que acredite su eficacia, de acuerdo con el consejo de peritos—, en la proporción que he mencionado, como una de las formas que el tribunal no puede computar cuando se viola uno de esos artículos.

En definitiva, la Cámara de Diputados sigue el criterio básico —aunque en distintos artículos— que había aprobado el Senado de la Nación cuatro sesiones atrás.

Con posterioridad a nuestra sanción, se ha venido insistiendo en los debates de la Cámara de Diputados sobre la posibilidad de una eventual tacha de inconstitucionalidad —al respecto, tengo que reconocer que la sociedad no ha criticado el tema de los delitos aberrantes y, por otra parte, la reinserción social en este caso podría desaparecer— que se ha basado en la violación del artículo 18 de la Constitución Nacional o de algunos pactos como el de San José de Costa Rica; aunque lo real y concreto es que la mayoría dice que está basado en la violación de la norma constitucional señalada.

Respecto de esto tengo que decir que en el artículo 18 de la Constitución Nacional, que es de 1853, en ninguno momento se habla de la reinserción social. El artículo 18 se refiere a que las cárceles tienen que ser sanas y limpias para seguridad y no para castigo; y cuando hace mención a la seguridad no significa reinserción social. Si vemos un poco los antecedentes doctrinarios de la Constitución y la interpretación al artículo 18, el reo era el que estaba a disposición para un juicio, por lo tanto, no podía gozar de una reinserción una persona que todavía no estaba condenada. En esta época, el tema de la seguridad estaba vinculado a las posibles ganancias que se podrían hacer contra el autor de

un homicidio. Pero, en definitiva, en la Constitución Nacional no está la reinserción social.

En segundo lugar, es cierto que este tema podría estar en el artículo 5º, inciso 6) del Pacto de San José de Costa Rica, que se aprobó por la ley 23.054 y en 1994 se incorporó a nuestra Carta Magna a través del artículo 75, inciso 22. Pero lo que dice el artículo es que las penas privativas de la libertad tendrán como finalidad esencial la reforma y readaptación social de los condenados. Entonces, si leemos los artículos 13 y 14 del Código Penal —que habían sido más interpretativos de esa posible inconstitucionalidad— veremos a las claras que el condenado a prisión perpetua podrá gozar de la libertad condicional una vez que reúna todos los requisitos, incluso los de buena conducta y cumplimiento de los dos tercios de la condena. Pero no obstante ello, el artículo termina diciendo que el juez podrá... Es decir que ello no es imperativo ni obligatorio, precisamente porque se trata de un tema de política criminal, que tiene que asumir el Poder Ejecutivo nacional.

Entonces, estamos frente a políticas de Estado, que se basan precisamente en qué política criminal queremos para cada tiempo y para cada lugar en que sucedan estas situaciones de las que estamos hablando. Por lo tanto, el artículo 14 también dice que los reincidentes no pueden gozar de la libertad condicional.

Ahora bien, ¿de qué inconstitucionalidad estamos hablando cuando una norma que tiene más de ochenta años nunca ha sido atacada de inconstitucional? Algunos doctrinarios lo han sostenido, pero en los hechos no ha sido declarada de inconstitucional.

Aclaro esto, porque veo que se repite muchísimo en los medios de prensa, como si estuviésemos frente a una inconstitucionalidad real y efectiva y nosotros estaríamos legislando en base a todas estas cosas que nos pueden traer algunas preocupaciones jurídicas.

En definitiva, ¿qué deja el artículo 13, señor presidente? El artículo 13 está dejando la misma posición que tenía antes. En el caso de las condenas menores a tres años es posible salir a los ocho meses. Entonces, es posible la libertad condicional a los ocho meses cuando la condena por el delito es menor a tres años. Aquí está en juego la preocupación por una política de reinserción social rápida y efectiva para las pe-

nas por delitos menores que contempla el Código Penal.

En segundo lugar, para todos los delitos con penas mayores a tres años hasta prisión perpetua también se goza de la posibilidad de libertad condicional, con la aplicación de los dos tercios de la condena cumplida y de los demás requisitos que exige el artículo 13.

Entonces, finalmente, esto es lo que queda efectivo y anterior al Código Penal. ¿Sabe cuántos son los casos entre los correspondientes a penas menores de tres años que pueden tener libertad condicional a los ocho meses y los de más de tres años hasta los que cumplen los dos tercios para libertad condicional? Constituyen más del 90 por ciento de todos los casos por delitos en la Argentina, entre detenidos esperando juicio y condenados. Por lo tanto, en la parte principal no hay ningún tipo de modificación del Código Penal.

No se trata de que estemos haciendo algún zafarrancho, como he escuchado por ahí. Última que algunos legisladores están hablando de este tema —de que estamos llenando las cárceles de presos— cuando no saben cuáles son los números. Esta estadística nosotros también la queremos conocer mejor. Si bien no es concreta, por ahí andan las cifras. Es la estadística que brinda el Servicio Penitenciario de la Nación cuando se le pregunta sobre este tipo de delitos.

Ahora estaríamos hablando de aquellos delitos cuya pena se elevó de 20 a 35 años. Son los delitos con pena de prisión perpetua que figuran los ocho incisos restantes del artículo 80, más aquellos delitos aberrantes a los cuales no les corresponde la libertad condicional.

Si nosotros hiciéramos una proyección en función de todos estos temas de los que veníamos hablando, de acuerdo con un dato que dio acá un senador, no estaríamos hablando de una población carcelaria superior a las 60 mil personas, incluidas las comisarias y las cárceles nacionales y provinciales.

Entonces, me parece que esto tenemos que manejarlo con cuidado. Me da la impresión de que no son buenos estos sistemas de alarma cuando estamos trabajando sobre un tema de seguridad en el marco de la crisis de emergencia que sufre el país.

Ayer, cuando estábamos en un seminario en el que se estaba discutiendo la posibilidad de...

Sr. Yoma. — ¿Me concede una interrupción, señor senador?

Sr. Presidente (Guinle). — Perdón, señor senador. Le pide una interrupción el senador Yoma. ¿Se la concede?

Sr. Agúndez. — Sí, sí, sí. Cómo no.

Sr. Presidente (Guinle). — Para una interrupción, tiene la palabra el señor senador Yoma.

Sr. Yoma. — Gracias, señor presidente; gracias, senador Agúndez.

De todos modos, voy a hacer uso de la palabra para explicar mi posición en este tema, pero quiero advertir con mucho afecto y respeto al señor senador Agúndez lo siguiente.

Esta mañana vemos los noticieros y pudimos apreciar, por ejemplo, cómo un juez de instrucción del Chaco manifestaba, según sus propias declaraciones, que estaba dispuesto a comenzar a liberar a doscientos ochenta presos ubicados en una cárcel cuya capacidad no llega a cien y con sólo seis empleados del Servicio Penitenciario para su atención. Entonces, este juez de instrucción declaró que si no solucionan el problema de la superpoblación carcelaria y del hacinamiento de la cárcel del Chaco va a comenzar a liberar a los presos.

Y esto está pasando no sólo en el Chaco sino también en muchas otras provincias argentinas. Entonces, no es ser alarmista ni nada que se le parezca, sino una realidad a la cual me voy a referir cuando me toque hablar.

Sra. Conti. — ¿Me concede una interrupción, señor senador?

Sr. Presidente (Guinle). — Senador Agúndez: le pide una interrupción la senadora Conti. ¿Se la concede?

Sr. Agúndez. — Sí, señor presidente.

Sr. Presidente (Guinle). — Para una interrupción, tiene la palabra la señora senadora Conti.

Sra. Conti. — Señor presidente: de todas maneras, no entiendo la interrupción del señor senador Yoma, porque nada de lo que estamos legislando es retroactivo. Así que el problema de los jueces que quieren liberar detenidos por falta de personal penitenciario o de infraestructura no va a ser solucionado a través de las leyes que estamos intentando sancionar.

Sr. Yoma. — Disculpeme, senador, pero he sido aludido.

Sr. Presidente (Guinle). – Señor senador Agúndez: ¿le concede la interrupción al senador Yoma?

Sr. Agúndez. – Sí, cómo no.

Sr. Presidente (Guinle). – Tiene la palabra el señor senador Yoma.

Sr. Yoma. – Señor presidente: ya es una agradable costumbre para mí que cada vez que hago uso de la palabra me responda la senadora Diana Conti. Lo que pasa es que generalmente, y este es otro de esos casos, nunca entiendo a qué se refiere cuando analiza mis expresiones, y ahora tampoco. Quizá después en privado le pida mayores precisiones, porque la verdad es que he quedado muy confundido acerca de lo que quiere decir.

Sr. Presidente (Guinle). – Continúa en el uso de la palabra el señor senador Agúndez.

Sr. Agúndez. – De todas maneras, lo que dice el senador Yoma es necesario para lo que veníamos diciendo y vamos a seguir diciendo sobre la seguridad.

Lo dije en una oportunidad y lo reitero ahora: mi partido y mi bloque me enseñaron que la inseguridad es una cuestión de política pública; es un problema de política de Estado. Tenemos que colaborar. Yo estoy colaborando. No se vaya a entender que estoy defendiendo todos los proyectos que envía el Ejecutivo porque algunos no me gustan. Pero sí los que hacen a una política de seguridad, y por eso estamos colaborando.

A veces no entendemos bien este tipo de política criminal. Doy un ejemplo. En la década del 80, cuando recién empezaba la democracia, se sancionó la ley de defensa de la democracia. Como había tanta debilidad en una democracia naciente, para defenderla se pusieron penas de hasta 50 años de reclusión, incluso sin el uso de armas. Lo dicen los artículos 235 y 236 del Código Penal, que se refieren a la sedición. Por eso, cuando estudiemos el artículo 55 del Código Penal nos vamos a dar cuenta de que es coherente lo que dice la Cámara de Diputados, porque tenemos penas privativas de la libertad que llegan hasta 50 años. Hay que leer todo. En ese tiempo era necesaria una política criminal, porque el derecho es la conducta viviente de un momento y tiempo determinados. No hacemos **seguridadismo**. Escuchamos a la sociedad porque la representamos.

He visto que muchos proyectos hablan de declarar la emergencia de seguridad en la Argentina. Por ejemplo, hoy me enteré de que en mi provincia se ha autoacuartelado la policía y están deliberando agentes penitenciarios de mi provincia. Imaginense si no estamos preocupados, si no es una emergencia bastante seria, lo que está diciendo el senador Yoma con relación a la cantidad de hombres y mujeres en las cárceles argentinas.

No quiere decir que sean muchos los detenidos. Lo que pasa es que hay muy pocas cárceles. Nos hemos comprometido a hacer muchas cárceles, pero hemos construido poco y nada. De todos modos, quisiera referirme más a la parte técnica que política del problema.

En cuanto a la política criminal, es cierto que tenemos que aportar grandes soluciones para los grandes problemas de seguridad de la sociedad. El senador citaba el ejemplo de la ley de defensa de la democracia –que Dios quiera que siga vigente, porque queremos defender la democracia para siempre–, que fue ideada como una medida excepcional, pasando por la pena máxima de las penas temporales contempladas por el Código Penal, porque era necesario para ese momento histórico.

Hoy es necesario para este momento histórico que en las cárceles estén los delincuentes peligrosos. Usemos todos los recursos para poder reinsertar a los otros que pueden tener posibilidad mayores de reinserción. Hoy tenemos malas y pocas cárceles y un desastre en la reeducación social. Un puñado de delincuentes peligrosos, que no deben ser muchos entre los 35 millones de habitantes, no puede tener en ascuas a todos los argentinos. Debemos tener la posibilidad de advertir que el problema de seguridad es grave, pero se puede resolver en la medida en que cada uno de los poderes empecemos a cumplir con nuestras obligaciones.

La verdad es que no soy amante de aumentar las penas y lo cierto es que siempre he votado negativamente sus agravamientos así como la imposición de condiciones más duras para los penados. Pero, realmente, hay que empezar a sentir la inseguridad como propia para actuar de otra forma. Esta es la colaboración que me ha exigido el bloque del partido al que pertenezco.

Otro tema al que quiero aludir es el que se relaciona con el hecho de que el aumento de penas —la faz disuasoria del delito— no va a solucionar el problema de la inseguridad. Pero hace pocos días explicó muy bien esta situación el señor senador Menem al referirse a los efectos de la pena.

Si bien hay una faz disuasoria también hay una faz retributiva. En la Argentina estamos acostumbrados a ver que una persona que cometió un asesinato —puede prohibir el desarrollo de una familia— tiene una pena de doce años porque los jueces imponen el mínimo y elevan la pena según el agravante. Pero debería ser distinto. Es decir, comenzar por catorce años y subir si hay agravantes o bajar si hay atenuantes.

Pero, lamentablemente, frente al grueso de los homicidios que se producen en el país, la pena que reciben los imputados no supera los doce años. Además, ya rige la rebaja de un tercio porque, con los dos tercios de cumplimiento, ya puede gozar de la libertad condicional.

Por otro lado, como si esto no fuera suficiente, también rige la propia rebaja dada por el Poder Ejecutivo, que es un tema en el que hay que seguir trabajando porque es una cuestión importante para el abordaje de la seguridad.

Se puede tener un gran juez, la mejor ley o el mejor sistema penitenciario, pero la impunidad empieza a correr cuando una persona mata a otra y a los cuatro años puede llegar a estar libre.

Hay que decir estas cosas con toda claridad porque de nada podemos asustarnos.

Por otra parte, señor presidente, en el día de ayer se hicieron unos seminarios sobre la protección integral del niño y del adolescente, fundamentalmente, frente a la posibilidad de bajar el nivel de imputabilidad a los catorce años.

Al respecto, hemos recibido muchas cartas de profesores, académicos y jueces en el sentido de que no es un momento ideal para hacer reformas al Código Penal cuando en la sociedad existe un clima de intranquilidad pública porque eso suele provocar respuestas exageradas. Sin embargo, no es menos cierto que cuando estos asuntos no están en el "tapete" de los principales problemas del país tampoco hay vocación política para abordarlos integralmente.

Dentro de poco tiempo se tratará el proyecto de bajar la imputabilidad de la edad de los menores, pero ya existe un proyecto de mi autoría sobre esta cuestión que data de 1996. Los senadores más antiguos en sus cargos han visto que todos los años me veo en la obligación de reproducirlo, ¡y han pasado ocho años!

Entonces, si no se tiene la capacidad para advertir los problemas que se vienen, por lo menos, abordémoslos cuando se dan las crisis. Ya está visto que en épocas de tranquilidad es muy difícil que el Congreso se aboque a su tratamiento.

Hace pocos días escuchaba el reclamo, y me parece muy bueno, sobre la adecuación de la legislación constitucional a la realidad de los tribunales populares. Pero en 1996, cuando el ex senador Berhongaray andaba por los pasillos buscando firmas que apoyaran su proyecto de cumplimiento con lo establecido por el artículo 24 de la Constitución Nacional —creación de tribunales por jurados— algunos lo veíamos mal porque nos parecía muy adelantado para la época. Y ni siquiera fue una iniciativa que llegara a ser tratada en comisión.

Por estas razones, me da la impresión de que debemos ser más categóricos y claros en la resolución de los problemas.

Me parece bien la propuesta en consideración porque es un momento de crisis. Realmente, la vamos a apoyar, más allá de algún planteo de inconstitucionalidad que pueda darse en el futuro.

Desde ya que solicitamos al Poder Ejecutivo que continúe adelante con la construcción de cárceles y con todo lo necesario para una reformulación de una policía con ética y entrenamiento suficiente para encarar las bandas dedicadas al delito.

Por eso, sugerimos al presidente de la Nación que haga el mayor esfuerzo para implementar más planes sociales en forma urgente, a fin de que no haya tantos excluidos del circuito económico en la Argentina.

También necesitamos seguramente que los jueces de la República empiecen a ser más independientes y puedan decidir con mayor independencia, sin tanto apego a los poderes políticos de cada provincia.

A su vez, vamos a pedir al Servicio Penitenciario Nacional que trate de buscar la unidad en

ese organismo, porque tener cinco servicios penitenciarios no va a servir para ningún tipo de reinserción social.

En igual sentido, esperamos también poder modificar la ley de reincidencia para que los indultos, conmutaciones y rebajas de penas de los gobernadores de las provincias y del presidente de la Nación no se hagan tan graciosamente y para que no se mande tan sólo la parte dispositiva de dichas medidas, sino también los motivos que las originan. En ese sentido, creo que los gobernantes del país también están comprometidos en el problema de la seguridad.

Todas estas cosas las estamos diciendo y no las vamos a abandonar, porque creo que con relación a ellas tenemos que luchar con la mayor fuerza.

Entonces, con respecto al primer proyecto destaco que el radicalismo lo va a apoyar, con todos los condicionamientos que hemos mencionado y con la expectativa de un futuro cambio, fundamentalmente en otras cuestiones no exclusivamente legislativas.

El otro proyecto se vincula con la modificación del artículo 124. Al respecto me parece que debemos pensar rápidamente en su modificarlo.

En ese sentido, ayer comuniqué que lo íbamos a aprobar. Creo que la norma tiene bien formulado el concepto, porque resulta que una violación o un estupro seguido de muerte tiene hasta hoy una pena de quince a veinticinco años. O sea, éstas son las desproporcionalidades que se generan muchas veces cuando apuramos los términos del tratamiento de muchos proyectos de ley.

Por esa razón, creo que el texto propuesto ahora está bien, por cuanto establece que se impondrá reclusión o prisión perpetua cuando en los casos de los artículos 119 y 120 resultare la muerte de la persona ofendida.

Sin embargo, sobre esta cuestión existe un problema, que espero que podamos solucionar, así votamos todos juntos el proyecto y lo devolvemos seguramente a la Cámara de Diputados.

Es decir, cuando hace seis meses aprobamos el proyecto sobre el secuestro extorsivo y la privación ilegítima de la libertad seguida de muerte —artículos 142 bis y 170— habíamos

cuando la muerte se produjera a continuación del secuestro, pero con intencionalidad. Ahora eso no está así. Y en el 142 también habíamos hablado de la muerte intencional, o sea, del dolo, que es lo que se necesita, ya que estamos ante un delito que va a llevar a la prisión perpetua, sin posibilidad de libertad condicional.

En consecuencia, me parece bien lo que expresó el presidente de la Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados, señor diputado Damiani, en el sentido de que vamos a hacer una interpretación dual. Porque si en el artículo 142 tenemos prevista la muerte no querida y la muerte intencional, al igual que en el artículo 170, pero en esta norma no la prevemos, cualquier juez de la República va a pensar que si luego de un estupro una chica muere por un accidente en un automóvil nuestra idea es aplicar la prisión perpetua y, además, imposibilitar la libertad condicional, lo cual es muy grave.

Por eso, me parece que estamos ante un solo artículo que la Cámara de Diputados puede solucionar en media hora de sesión.

Por mi parte, propongo que el artículo establezca que la pena sea de quince a veinticinco años de prisión o reclusión, si de los hechos previstos en los artículos 119, segundo, tercero y cuarto párrafos y 120, resultare la muerte de la persona ofendida como consecuencia no querida por el autor. La pena será de prisión o reclusión perpetua si se causare intencionalmente la muerte de la persona ofendida. Creo que esa interpretación es la correcta.

Ustedes recordarán aquí que el proyecto vamos a tratar a continuación, que va a informar la senadora Ibarra, es un proyecto que va a sufrir modificaciones. El radicalismo va a acompañarlo porque que en el artículo 1º no podemos delegar facultades, y menos en el procurador general.

Me parece que están bien todas las observaciones que se han hecho. Y como va a volver a Diputados les ruego que analizáramos la posibilidad de reformular el artículo para hacerlo más claro porque, de lo contrario, cualquier juez de la República —repito— va a sostener que este artículo no resulta preciso.

Si nosotros hacemos la interpretación auténtica sosteniendo que se trata de un delito doloso y, en consecuencia, si es culposo se lo aclara expresamente —como lo hemos hecho al modi-

ficar los artículos 142 y 170— considero que sería bueno dejarlo expresamente aclarado.

Ahora quiero simplemente referirme al artículo 55, que lo vamos a tratar la semana que viene, porque evidentemente es consecuente con la elevación de las penas. Pero de todas maneras es necesario sincronizar algunos fundamentos que teníamos y queríamos darle al proyecto.

Por último, debo decir que ahora, cuando uno aumenta las penas es represor y cuando las baja es garantista. Una vez dije que los argentinos muchas veces nos levantamos represores y nos acostamos garantistas, según cómo nos vaya en el día. Hace unos días escuché que alguien había declarado que la polémica entre garantistas y represores es absurda porque el sistema requiere de ambos. Debemos ser garantistas en cuanto a asegurar el debido proceso —y eso es lo que debemos hacer todos nosotros— y represores porque cada artículo del Código Penal dice: “Será reprimido con pena de prisión...”. Esta es la represión estatal. Entonces, creo que no debemos equivocar los términos. Esto felizmente lo dijo un hombre que integra el gabinete nacional, que es el doctor Norberto Quatín.

Por eso quiero terminar mi exposición diciendo que no debemos confundir los términos ni los tantos. Trabajamos para la gente pero no queremos tener el lugar de garantistas ni de represores.

Sr. Presidente (Guinle). — Tiene la palabra la senadora Ibarra para fundamentar el tercer proyecto.

Sra. Ibarra. — Señor presidente: voy a ser muy breve porque este proyecto se inscribe en los criterios que ya había fijado el Senado Nacional al dictar las dos leyes anteriores que crearon las fiscalías de distrito de La Boca y de Saavedra, en la Ciudad de Buenos Aires.

En primer lugar, voy a explicar el proyecto y después voy a hacer alguna mención específica al tema de la ciudad.

Este proyecto ya tiene sanción de la Cámara de Diputados. Crea fiscalías de distrito en el ámbito de la ciudad, lo cual significa que los fiscales que actualmente tienen competencia en el ámbito de la justicia de instrucción y correccional en todo el territorio de la ciudad, serán fiscales de distrito. Esto es, van a mantener com-

petencias territoriales por zonas, lo cual implica continuar con el proceso de descentralización de las fiscalías acercándolas a los barrios y a los vecinos.

Se hicieron las experiencias anteriores de las dos fiscalías que fueron creadas por ley y se agregan ahora siete, hasta finalizar el proceso de creación de todas las fiscalías barriales.

Este proyecto atiende fundamentalmente a poder contar en las fiscalías con la memoria del mapa del delito zonal dado que, actualmente por cada zona están pasando veinticuatro fiscales por año. Es decir que, en dos años, están pasando cuarenta y ocho fiscales sin conocimiento de la memoria de las cosas anteriores que iban aconteciendo.

El proyecto que venía de Diputados tenía una autorización muy general y muy amplia. En este sentido, varios senadores y senadoras habían planteado algunos reparos respecto a que era el procurador el que iba a crearla. Se trata de una situación que nosotros no podíamos valorar, porque entendemos que es el propio Congreso Nacional el que crea las fiscalías.

Nosotros hemos reformulado estos textos. Lo hemos consultado con el presidente del bloque del justicialismo y con el presidente del bloque de la Unión Cívica Radical; lo hemos hablado también con el ministro y hemos establecido en el artículo 1º la creación de las fiscalías distritales por el Congreso. Luego damos una autorización para la instalación de acuerdo a la reformulación de funciones de los distintos fiscales.

Dentro de ciento ochenta días se prevé el efectivo traslado de siete de estas fiscalías, que se suman a las dos que existían. No hay afectación mayor de fondos, en tanto se hace con el mismo personal y los mismos funcionarios con los que las fiscalías venían funcionando. Se da una autorización al procurador para firmar convenios con la ciudad de Buenos Aires a fin de facilitar el cumplimiento de la ley.

Como dato importante, se establece la creación de la Unidad de Fiscales para Delitos Complejos. Este tema también lo hemos tocado, de forma tal que, ante las características e importancia de determinados hechos, el procurador fiscal pueda determinar que a esta unidad de fiscales vayan fiscales seleccionados por concurso de oposición y antecedentes entre los fiscales, que son actualmente ochenta y cuatro.

Además, se establece que esto se realice por riguroso sorteo, así como también la sistemática del sorteo, de forma tal que no sea el propio procurador —esto sí tenemos que verlo institucionalmente— quien pueda determinar o elegir el fiscal al cual se le va a asignar la causa.

En el mismo sentido, también se estableció un mínimo de dos años de fiscal por zona, de manera tal que la zonificación no permita apartar a un fiscal de una causa por parte del procurador de turno.

Hemos tomado algunas de estas modificaciones para acotar lo que va a ser la instalación de estas fiscalías barriales, acotadas con las facultades al procurador para organizar esto; pero dejando pautas claras en cuanto a la selección por concurso de oposición y antecedentes, con reglamentación en el sorteo y la imposibilidad de elegir a dedo el fiscal que va a intervenir en las causas.

No hemos firmado el dictamen porque el último texto consensuado lo terminamos a última hora. Pero lo hemos trabajado entre varios de los presidentes de bloque y con consulta al Poder Ejecutivo.

Al momento de tratarlo voy a leer el artículo nuevo, que prácticamente recepta el mismo sentido, habiendo emprolijado los temas en materia de facultades del Congreso, que es para crear las fiscalías, y en lo que hace a las facultades del procurador, que han sido precisadas con mayor exactitud. Esto en lo que hace a este proyecto. Después voy a formular mi intervención personal en lo que hace a los demás proyectos.

Voy a solicitar, señor presidente, autorización para insertar mi discurso en lo que hace al tema de la autonomía de la ciudad. Creo que no es más un tema de debate hoy. Este es un proyecto que tiene que ver con el plan de seguridad del gobierno y la descentralización de fiscalías.

Sí tenemos pendiente un tema, porque creo que todos entendemos acá que el tema de las fiscalías de la ciudad no tendría que estar tratándolo el Senado de la Nación ni el Congreso Nacional sino la Legislatura de la Ciudad. Éste es un tema que tenemos pendiente, que abarca temas mucho mayores. Pero como senadora de la Ciudad —como dije— voy a pedir autorización para insertar mi discurso, en forma personal, en lo que hace a la información respecto de este proyecto. Gracias, presidente.

Sr. Presidente (Guinle). — Tiene la palabra el señor senador Prades.

Sr. Prades. — Señor presidente: hay algo que quiero expresar, sin perjuicio de apoyar incondicionalmente la tarea llevada a cabo por la comisión y en particular por el presidente. Esto, compartiendo que el problema de la criminalidad es de tratamiento integral, mucho más profundo y que abarca más que el solo dictado de las leyes, en el claro entendimiento de que con el solo aumento de las penas tampoco se soluciona este problema. Esto lo vamos a ver con el tiempo.

Pero quiero hacer una observación personal, particular, que tiende a encontrar algo de razonabilidad en lo que estamos sancionando. Está referido a la sustitución del artículo 14 del Código Penal en lo que respecta a la no concesión de la libertad condicional.

Aquellos que hemos ejercido y ejercemos la profesión, sobre todo en materia penal, somos conscientes que en el *iter criminis*, que es el camino del crimen, muchas veces suceden homicidios, donde el autor del hecho se propone otro tipo de delito y termina en el homicidio. Esto se puede dar, por ejemplo, en los casos en que el autor del hecho está bajo el efecto de estupefacientes o alcohol. Y no estamos en presencia de un individuo que tiene un *animus delinquendi*. Es decir, no es un delincuente consuetudinario.

El instituto de la libertad condicional está dirigido, precisamente, a ese tipo de delincuente que es el que se llama delincuente único, circunstancial, de hecho accidental.

Esto es en contraposición al delincuente que tiene ánimos de delinquir, que tal vez su profesión sea la de delinquir.

Encontrando razón a todas estas leyes que estamos sancionando por una cuestión de oportunidad o necesidad social, me hago la siguiente pregunta: ¿Por qué vamos a negar solamente la libertad condicional al individuo que cometa un homicidio luego de una violación o luego de un secuestro extorsivo? El delito aberrante es la figura típica, que es el secuestro extorsivo y la violación.

Aún más, muchas veces para los casos de violaciones —entiéndase bien lo que voy a decir— es más tranquilo para la víctima la muerte que llevar toda su vida una cruz, como sucede

en muchísimos casos en numerosos tribunales del país.

En aras de la praxis y de la objetividad jurídica y de dar una respuesta clara a este momento que vivimos, me parece que no solamente habría que restringir la libertad condicional al homicida luego de un secuestro extorsivo o de una violación, sino al violador y al sujeto que ha cometido un secuestro extorsivo. Me parece que esto tiene más razonabilidad y más objetividad. Tiene más practicidad cuando el hecho sucede. Y más en este momento en que, en alguna medida, esta sanción implicaría disminuir sensiblemente este tipo de hechos delictivos. Nada más, señor presidente.

Sr. Presidente (Guinle). – Tiene la palabra el señor senador López Arias.

Sr. López Arias. – Señor presidente: voy a pedir a mis vecinos si me dejan hablar un minutito, porque realmente me incomoda.

Ante todo, quiero destacar, señor presidente, lo que fue la actuación del Senado en todo lo referente a las normas de seguridad. Realmente destaco que desde mucho antes de toda esta crisis, venimos trabajando en normas que tienen que ver con seguridad, haciendo un trabajo serio, responsable, sin rehuir los debates, abriendo realmente la discusión sobre temas que son muy importantes y que queremos tratar siempre con la seriedad que corresponde.

Por ejemplo, en este momento, se está haciendo un importante trabajo en materia de régimen penal de menores con un seminario. También se está tratando el tema del juicio por jurados con una profundidad y una altura que son dignas de destacarse.

Personalmente, sigo creyendo que en todas estas normativas que estamos tratando, las sanciones que ha dado la Cámara de Senadores a algunos de estos proyectos de ley son superiores técnicamente a algunas de las modificaciones que nos llegan después de la Cámara de Diputados. Concretamente, hablando de los proyectos que tenemos bajo examen, realmente reivindicó el equilibrio, la seriedad y responsabilidad que tenían los proyectos originalmente votados por esta Cámara. Y creo que algunas de las modificaciones que vuelven de Diputados nos ponen casi al borde de la inconstitucionalidad y se corre el riesgo de tergiversar el sentido constitucional de la pena con alguna de estas

normativas. Pero sé que esto es un tema casi abstracto, señor presidente, porque en Diputados se han aprobado estas modificaciones con los dos tercios de los votos y existen posiciones tomadas en el seno de nuestro cuerpo; qué hacen pensar que será imposible revertir o introducir algunos cambios que creo hubieran sido muy buenos para restablecer el equilibrio.

Personalmente –creo que esto es público– no soy de los que creen en el carácter mágico de las modificaciones de las leyes penales. Creo que el tema de la inseguridad es algo muchísimo más complejo que la simple modificación de los códigos. También creo que modificar códigos tal vez sea la parte más fácil de esta problemática. Pero la solución al tema de la inseguridad, en la Argentina, pasa por otra serie de elementos, por una fuerte decisión política, inclusive en materia de presupuesto, para dotar a la policía, a la Justicia, para poder hacer realmente una tarea de prevención más que una tarea de represión, que es mucho más importante.

Por supuesto que esto requiere una reestructuración de las policías. Muchos de los ejemplos que estamos viendo de mala presencia policial, de delitos ligados a la actuación policial, no se refieren a policías que hayan estado limitados en el ejercicio de sus facultades, sino a policías que vienen de aquella época de poderes casi absolutos, inclusive del régimen militar, entre los que todavía se mantienen focos de corrupción y de prepotencia que hay que ir corrigiendo. Sin duda es una tarea que vamos a tener que llevar adelante con muchísimo esfuerzo. Habrá que acompañar esto y dotar de medios a esos cuerpos, para que realmente tengamos una policía que funcione. Habrá que capacitarla, prepararla.

Lo mismo vale para el tema del Poder Judicial. Las estadísticas muestran el escasísimo nivel de condenas que se dictan. Y esto no siempre es culpa de los jueces. Hay que avanzar, dotarlos de medios y modificar, inclusive, los sistemas y las estructuras orgánicas de tribunales para permitir un funcionamiento más ágil de todo el mecanismo judicial.

¿Para qué vamos a hablar del régimen penitenciario? Es la otra cara de la moneda del aumento de las penas o de las limitaciones a la excarcelación. En mi provincia, hemos vivido, durante mucho tiempo, esta cosa indigna, que

realmente lastimaba, que era ver a los presos federales viviendo en contenedores. Dentro de estos contenedores he visto mujeres, con familia, con menores en los brazos. Esa era la gente de nuestra frontera cuya misera era aprovechada por los verdaderos traficantes de drogas convirtiéndose en acarreadores, en una cadena interminable casi inconsciente que terminaba viviendo este castigo. Es decir, este otro aspecto, que espero que se solucione —se está licitando una cárcel federal, en mi provincia—, es parte de lo que vamos a tener que encarar en el futuro y que tiene que ver, en serio, con el problema de la inseguridad.

También, señor presidente, viendo las modificaciones de Diputados, debo reconocer que, aunque algunas no me gusten, no son otra cosa que una expresión de lo que hoy es parte de esta caótica realidad que tiene nuestro Código Penal. No es otra cosa que una expresión de modificaciones que se han venido haciendo durante años, entre ellas ésta que fuera mencionada por el senador Agúndez, que es la modificación del título X del Código Penal, que tiene que ver con todos los temas vinculados a delitos contra los poderes públicos y el orden constitucional, que ha permitido que tribunales de nuestro país hagan la interpretación, actualmente muy extendida, en el sentido de que la pena máxima privativa de la libertad ya no es de veinticinco años, como tradicionalmente se consideraba, sino de cincuenta años por aplicación del doble de la pena, que establece el artículo 235 para la figura madre, que era la del 226.

Acerca de estas modificaciones introducidas por Diputados, que chocan a primera vista, reconozco que son parte de la expresión de esto que aparece hoy, en la ley penal vigente, que es parte de esta tarea necesaria que tenemos que llevar a cabo en cuanto a coordinar las penas y restablecer el equilibrio de ellas en todo el sistema.

Algunas de estas normas que nos llegan para estudio también conllevan el riesgo de no tener flexibilidad para que los jueces puedan lograr la reinserción social de los condenados y de que verdaderamente nos encontremos en callejones sin salida, o aplicando penas excesivas. Ya mencioné, por ejemplo, el tema de las armas, de aquella ley que había llegado modificada, que nos ponía en el riesgo de que algún paisano, que se hubiera pasado en carnavales y que salía

con un "matagatos" para cazar gorriones, terminara preso con una condena de cinco a quince años, de acuerdo con como quedó redactada la norma. Lo mismo puede ocurrir con parte de esta normativa porque, tal como dijo el señor senador Agúndez, según la redacción de esta norma se podría interpretar que el abuso que establece el artículo 120, seguido de una muerte accidental por cualquier cosa, obliga al juez a imponer una pena de cadena perpetua, situación que también podría llegar a ser excesiva. La interpretación fehaciente que se está solicitando de parte de este cuerpo puede ayudar al juez, pero bien sabemos que en la norma penal la interpretación es lo que menos vale e importa mucho más la literalidad del tipo penal, por lo que realmente deberíamos tratar de avanzar en la definición precisa de las conductas que se quieren sancionar.

De todas maneras, frente a esta situación y a la luz de la legislación vigente y de las interpretaciones judiciales que existen en la actualidad sobre el monto de la pena, una condena de prisión de 50 años como la que existe en el Código Penal vigente podría llevar a libertades condicionales a los 35 o 36 años de prisión. Frente a todo esto, no me queda otra cosa que rogar que lo más rápido posible conformemos esa bendita comisión, cuya constitución venimos amagando desde hace mucho tiempo, a efectos de ordenar las penas y coordinar la figura del Código Penal para que podamos superar algunas de estas contradicciones o parches que se han ido sancionando como consecuencia de tantas modificaciones que se han introducido en los últimos años.

Con esta expresión de deseos voy a ser consecuente con lo que votamos en ocasión de tratar por primera vez estas normas y, en consecuencia, voy a votar afirmativamente, con las reservas que he hecho con relación a la norma que modifica los artículos 13 y 14 del Código Penal y al proyecto que propicia la modificación del artículo 124. En este último caso, reitero que una de las consecuencias puede ser el establecimiento de una norma excesivamente rígida. Por lo tanto, al no tener flexibilidad pondrá en riesgo el principio de reinserción social, que es uno de los fundamentos del sistema penal en la Argentina.

Sr. Presidente (Guinle). — Tiene la palabra la señora senadora Conti.

Sra. Conti. – Señor presidente: los argumentos expuestos por el señor senador preopinante me hacen abreviar mi discurso. La única diferencia que quiero resaltar es que, a veces, un mismo pensamiento nos lleva a votar afirmativa o negativamente. En mi caso, desde ya adelanto que voy a votar negativamente los dos proyectos de ley en revisión de modificación de distintos artículos del Código Penal.

De a poco, sesión tras sesión, voy dando las razones por las cuales he sostenido de por vida una misma postura en esta materia y, de paso, hago pedagogía, con mucha humildad, como siempre, en este recinto.

Concretamente, creo que estamos haciendo uso del frontalismo del derecho penal. El frontalismo era una característica arquitectónica del fascismo que llevaba a la construcción de edificios con frentes pomposos, imponentes de poder y con adornos grandilocuentes, aunque dentro de ese edificio no hubiera nada. Y nosotros sabemos perfectamente que detrás de estas modificaciones del Código Penal no hay absolutamente nada.

Sabemos que la ley penal más gravosa no tiene efecto retroactivo. Sabemos que con la sanción de estas leyes no vamos a condenar con mayor rigor ni a quien mató a Axel Blumberg ni a la chiquita Marela, que fue violada y luego asesinada por su violador. Sabemos perfectamente que corremos el riesgo de inconstitucionalidad cuando a una pena la alejamos de los preceptos constitucionales que exigen que la aplicación del derecho penal es solamente para dar seguridad, lo que implica, a su vez, seguridad jurídica; esto es, la posibilidad de que no se afecten bienes jurídicos ni derechos, y la posibilidad de coexistencia pacífica y no el castigo por el castigo en sí mismo. Todo el orden jurídico debe ser retribucionista o reparador y dentro de él, que es donde se decide cuáles son los bienes jurídicos tutelados, el derecho penal viene a ser como la última ratio, o sea, la posibilidad coercitiva del Estado, que debe hacer uso del monopolio de la fuerza e imponer penas que implican la privación de derechos. Efectivamente, en el caso de la “prisionización”, la pérdida de la libertad ambulatoria no puede traducirse en largos tiempos para obtener una libertad condicional o en penalidades perpetuas que no permiten la fragmentación temporal de la apli-

cación de un castigo o pena que resulte individualizable en función de la gravedad del injusto, la culpabilidad del autor y su posibilidad resocializadora. Estamos transformando o siendo demagogos y diciendo que no aplicamos pena de muerte pero aplicamos la prisión perpetua.

Lamentablemente, en este caso no estoy de acuerdo con las explicaciones que ha dado el presidente de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales respecto de la modificación del artículo 124 del Código Penal. Cuando el Código Penal habla de homicidio intencional, homicidio doloso, lo dice expresamente. Un homicidio doloso es agravado cuando después de la saña que puede implicar una violación, el violador mata intencionalmente y a esto el artículo 80 le pone prisión perpetua.

Nuestro Código Penal ya prevé la prisión perpetua para el violador que mata con intención de matar. El artículo 124 agrava, porque eleva el mínimo del homicidio simple –que es ocho años– a un mínimo de diez años y le pone el máximo de la pena, veinticinco, al violador, estuprante o abusador sexual, de cuyo acto resultara la muerte. El único caso que nuestro Código Penal admite la prisión perpetua cuando de la tortura deviene la muerte es por la calidad del autor y éste tiene que ser funcionario público. Y aumentamos la pena por el “gatillo fácil” y los policías que en nuestro país matan a menores con impunidad absoluta. Por lo tanto no creo que el artículo 124 pueda ser modificado para que vuelva a Diputados ni que deba votarse como vino de esa Cámara, porque estamos haciendo demagogia, tal vez para que salga en los diarios, diciendo que creamos una pena que en nuestro Código Penal ya existe.

Con el hecho de elevar a 35 años el tiempo de “prisionización” –como si veinte años fuera poco o nada para que un recluso que conformó los reglamentos carcelarios y obtuvo informes favorables, tenga la posibilidad de salir en libertad y coexistir en paz– estamos agravando una pena de manera tal que la convertimos en injusta, y la pena injusta es una pena inconstitucional.

En la sesión anterior traté de hacer esfuerzos a mi formación dogmática para acompañar a este reclamo social de la clase media de la Capital Federal y de mi conurbano bonaerense que reclama –por la alarma social que producen el delito y la situación de inseguridad– medi-

das que pueden ser reclamadas por quien no conoce el derecho ni el sistema penal, pero que en modo alguno pueden ser sostenidas en este Honorable Congreso. Creo que corremos el riesgo de ser un Congreso más decadente que el de la década infame.

El Senado de la Nación, en 1933, a propuesta del senador Arancibia, intentó imponer la pena de muerte a través de la silla eléctrica, porque había habido un caso de secuestro seguido de muerte, el caso Ayerza. Fue Alfredo Palacios el que siendo abogado pero no penalista defendió con ahínco la postura contraria. En ese caso fue la Cámara de Diputados la que puso racionalidad al tema y la pena de muerte tampoco se sancionó. Y un bonaerense, como Rodolfo Moreno, que no puede decirse que era un progresista ni un defensor de los derechos humanos, sostuvo a ultranza su Código Penal sin modificarlo y es más o menos el que actualmente nos rige. En ese momento, en la década del 30, el Congreso decidió no hacer frontalismo del derecho penal, no engañar al pueblo, ni hacerlo imaginar una solución mágica al problema de la seguridad. No va a salir de este Congreso una solución de ese tipo, sino del fomento y apoyo a las políticas públicas en un plan diseñado desde el gobierno nacional de mediano y largo plazo, trienal. Esa es la forma en que podemos contribuir.

Sr. Presidente (Guinle). – Tiene la palabra el senador Giustiniani.

Sr. Giustiniani. – Señor presidente: adelanto mi voto negativo al proyecto remitido por la Cámara de Diputados que modifica los artículos 13, 14 y 15 del Código Penal que restringen la libertad constitucional. También adelanto mi voto negativo a la modificación del artículo 124. A su vez, adelanto mi voto positivo al proyecto de ley que informó la senadora Vilma Ibarra al pleno, por el cual se crea en la ciudad de Buenos Aires las fiscalías de distrito barriales.

A continuación fundamentaré mi voto negativo a los dos primeros proyectos. Creo que estamos en el mismo sentido conceptual que discutimos en la primera sesión: personalmente no comparto que el aumento de penas vaya en dirección de disminuir el delito.

– Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente del Honorable Senado, senador

Marcelo López Arias.

Sr. Giustiniani. – La solidez del miembro informante, que ha hecho un desarrollo del proyecto de ley en consideración como también de otros que esta Cámara ha tenido en tratamiento, no ha despejado mis dudas en tres aspectos: el primero hace a la constitucionalidad, el segundo hace a la desproporcionalidad de las penas y el tercero hace referencia al contexto en que estamos tratando estas leyes.

Evidentemente, estamos en un tiempo de crisis en el cual hay que dar una respuesta efectiva desde todos los poderes del Estado a este reclamo de la sociedad con relación a la seguridad que, junto al tema del empleo, desde hace muchísimos años, vienen siendo los reclamos más fuertes de todos los ciudadanos de la República Argentina.

Recién la senadora Conti hizo referencia al doctor Alfredo Palacios, primer diputado socialista de América latina. Es verdad que en el tratamiento de la ley de residencia él fue uno de los que más batalló por su derogación. Esa ley se impuso en la República Argentina para perseguir a los inmigrantes italianos y españoles porque eran socialistas o anarquistas y representaban una amenaza, entre comillas, al sistema. Entonces, esa ley de residencia vino a perseguir a aquellos inmigrantes que vinieron a abonar con su trabajo nuestra tierra. El decía que ninguna ley puede sancionarse desde la ofuscación.

Es muy importante que nosotros demos una respuesta a la crisis del momento, pero también es muy importante que lo hagamos con la seriedad de saber que nosotros estamos hoy pero mañana no, y que las leyes quedan y se integran al plexo jurídico de la Nación.

De todas maneras...

–Murmillos en el recinto.

Sr. Giustiniani. – No sé si corresponde, presidente, que pida a los senadores que bajen un poquito la voz...

Sr. Presidente (López Arias). – Señores senadores: la Presidencia solicita que, en respeto a quien hace uso de la palabra, no se hagan "sesiones paralelas", así el orador podrá hablar con tranquilidad y todos podrán atender lo que expone.

Continúe, señor senador Giustiniani.

Sr. Giustiniani. – Gracias, señor presidente.

En el tema del contexto decía el eminente sociólogo francés Loïc Wacquant en su libro *Las cárceles de la miseria*: “A comienzos del siglo XXI se asiste a una profunda transformación del orden político en las sociedades occidentales, que podría resumirse como el pasaje del Estado providencia al Estado penitencia. El estado de bienestar cedió espacio a la acción de los mercados que agudizaron las diferencias sociales e hicieron asumir a los Estados un papel esencialmente represivo: del Estado que redistribuye e integra al Estado cuasi ausente que sólo aparece para castigar”.

De allí que en el contexto en que se da este debate desde luego que la situación social y económica del país tiene que ver con el grado de delincuencia. Pero cuando analizamos la respuesta dada observamos que también es cierto lo que se dijo en este recinto. Me refiero a que en los últimos años ha aumentado la cantidad de leyes que endurecieron las penas y, paralelamente, también aumentó el delito. Esta es una constatación de la realidad.

Por ello me parece fundamental discutir el contexto de la situación porque si bien la ley se integra al plexo normativo de la Nación, lo cierto es que se hace carne cuando da respuestas concretas.

Por otro lado, se hizo mención a la pena de muerte. Pero ella dejó de tener vigencia en el proyecto de Código de Tejedor a raíz de la realidad del país, dado que no había ningún consenso social para su implantación.

Señor presidente: no quiero hacer de maestro ciruela, no es mi estilo ni tampoco es la oportunidad para hacerlo, pero es importante resaltar, como bien lo hizo el señor miembro informante, que el artículo 18 de la Constitución Nacional no sólo indica que las cárceles de la Nación serán sanas y limpias sino que agrega: “...para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas...”.

Por otra parte, en el capítulo “Derechos Civiles y Políticos”, parágrafo V, “Derecho a la integridad de las personas”, en los puntos 2 y 6 se vinculan dos aspectos. Por una parte, cuando dice: “Toda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano...” y, por la otra, cuando dice: “Las penas privativas de la libertad ten-

drán como finalidad esencial la reforma y la readaptación social de los condenados”.

Lo que pone verdaderamente en situación la cuestión en tratamiento es la crisis que vive el sistema penitenciario nacional, que no da una respuesta eficaz a lo que demandan la Constitución Nacional y los pactos internacionales.

En la mayoría de las provincias argentinas la crisis penitenciaria es absoluta. En Rosario, todas las comisarias de la totalidad de las seccionales están atestadas de presos, y los policías deben cumplir una función de tipo penitenciaria para la que no están preparados.

La complejidad del drama de la seguridad en nuestro país debe ser abordada desde esta perspectiva.

La respuesta que se da en lo atinente a la libertad condicional no es la correcta porque no solamente no se condice con esta demanda constitucional y con el Pacto de San José de Costa Rica, sino con el sentido común. ¿Cuál es el sentido común de la libertad condicional, tal como está planteada? Que el reo no termine su condena y al otro día salga a la calle, sino que cuando se acerque el final de su condena tenga una salida provisoria para que vaya paulatinamente reinsertándose en la sociedad a fin de que cuando la termine pueda ser un ciudadano apto. Este es el sentido común de la libertad condicional.

Por eso, eliminar este instituto de un plumazo implica confundir dos conceptos: el de la readaptación con el de la extensión de la pena. Si se necesita establecer una pena mayor, el juez la podrá imponer, pero no por eso hay que eliminar la posibilidad de que el reo tenga un proceso paulatino que no lo lleve de un día para el otro, como en las películas, a que se le abran las puertas y deba salir a la calle con su bolsito a ver si se puede integrar en la sociedad. Este es el sentido común de la libertad condicional.

Por eso creo que es absolutamente negativa esta norma; no solamente tal como se había planteado en el Senado –por eso la voté en contra en aquella oportunidad–, sino muchísimo más como viene de la Cámara de Diputados de la Nación, dado que esta agrega elementos que atacan justamente la cuestión conceptual de la libertad condicional.

Entonces, ¿en qué contexto estamos llevando a cabo este debate: en el marco de un au-

mento de las penas o para suprimir la libertad condicional en algunos casos? Creo que el contexto debe ser el de la respuesta eficaz, para lo cual es mucho más concreto analizar el sistema penitenciario o, en todo caso, que se cumpla la ley de ejecución penal 24.660, que actualmente no se cumple.

Existe otro aspecto que quiero mencionar y que ha resaltado muy bien el doctor Alfredo Solari, profesor de garantías constitucionales de la Universidad de Buenos Aires.

Dicho profesor sostiene que la solución para el problema de la inseguridad no pasa por la abrogación de las garantías jurídicas, porque éstas se desarrollaron para tutelar la seguridad jurídica del pueblo frente al gobierno; no por su seguridad material. Por eso, garantías jurídicas e inseguridad pública no son términos antitéticos y la consecución de la última no requiere sacrificar a aquéllas. La seguridad material se logra mediante una más eficiente prevención antes de que el delito se cometa y una más eficaz e inmediata represión una vez cometido, mientras que la seguridad jurídica se obtiene controlando la legalidad constitucional en cada una de esas etapas.

Por eso, comparto que el debate sobre garantistas y no garantistas es falso, pero conceptualmente considero que cuando caen las garantías avanza la impunidad. Y el fenómeno de la inseguridad en nuestro país radica en atacar la impunidad, los focos de corrupción y la conexión entre las mafias políticas, policiales y judiciales en cuyo contexto se procrea el estado de indefensión de toda la sociedad.

Voy a votar en contra de la modificación del artículo 124 porque, como dije al principio, el aumento de las penas no constituye una respuesta adecuada y eficaz. Asimismo, como se ha hecho en otras oportunidades en este mismo recinto quiero citar a un padre del derecho penal moderno, al doctor Beccaria, para quien uno de los mayores frenos del delito no es la crueldad de las penas, sino su infalibilidad. En este sentido, la certidumbre de un castigo, aunque sea más moderado, causará siempre mayor impresión que el temor de otro más terrible pero unido a la esperanza de impunidad.

Finalmente diré que se ha trabajado mucho en las distintas comisiones, en el marco de las cuales se están desarrollando seminarios. Yo

aspiro a que la respuesta del Senado de la Nación parta de la razonabilidad, la serenidad, la profundidad conceptual. Porque no adhiero a que en este camino de aumento de penas, donde nosotros sostenemos algo que va a Diputados y parece que fuera algo así como quién apuesta más, quién da más respuestas aumentando más las penas, queremos hacer creer a la sociedad que vamos a mejorar la situación y esto sabemos que no es así.

Sr. Presidente (López Arias). – Tiene la palabra el senador Yoma.

Sr. Yoma. – Señor presidente: definitivamente, ya a esta altura de los debates en torno del tema de la seguridad, nadie puede sostener con ninguna dosis de solidez que el aumento de penas actúa como elemento disuasivo en la comisión del delito. Creo que ya nadie puede considerar esta característica.

También creo que vamos a convenir en que, por lo que estamos haciendo en los últimos meses con el Código Penal, luego va a haber que hacer una interpretación a los magistrados para su aplicación, que realmente se va a prestar para cualquier tipo de arbitrariedades y de interpretaciones sobre una ley penal que cuanto más concreta y específica sea, más eficiente será.

Entonces, creo que al Código Penal realmente lo hemos transformado en una mezcla de cosas y de conductas típicas que se superponen, y penas que no guardan relación con las conductas. Cada día se agrava el problema y lo agravamos, a su vez, en lugar de aportar soluciones al tema.

Creo que al seguir en el tren de incrementar penas como medida aislada –reitero, ya no buscando la disuasión sino también la represalia de la sociedad– se corre el riesgo de no ser eficiente y de que no consigamos el objetivo que buscamos.

Decía en un anterior debate que el agravamiento de penas que vota el Congreso responde a un estado de ánimo de la sociedad que quiere ver en la retribución del delito, en la sanción de la conducta típica, un agravamiento de la situación para aquel que delinque.

Entonces, la pena cumple esa función. Lo que estamos haciendo es decir, de acuerdo con lo que decía Kelsen en aquel librito titulado *¿Qué es la Justicia?*, que justicia es lo que hoy considera la sociedad en este momento histórico de

terminado, que agrava las penas. Entonces, para este momento histórico no valdrían los órdenes penales, el orden jurídico, la relación entre tipos delictivos y penas, porque hoy el estado de ánimo de la sociedad lo que exige es esto.

Ahora, ¿qué es lo que vamos a lograr si seguimos haciendo esto como mecanismo aislado? ¿Vamos a conseguir acaso siquiera agravar la sanción de la sociedad? ¿Vamos a conseguir que el que delinque tenga una pena mayor y que, por ende, tenga por parte de la sociedad una sanción más dura? ¿Vamos a conseguir en alguna medida que aquel que comete delitos menores –ya no la violación o el secuestro seguidos de muerte, sino delitos menores– pueda algún día acceder a una condena, a una ejecución condicional o a una libertad condicional? ¿Vamos a poder lograr que ese delincuente se reinsera en la sociedad? Yo no pierdo las esperanzas de tener un régimen carcelario, un régimen penal que logre la reinserción de personas que han delinquido. Creo que lo que estamos haciendo, si seguimos votando este tipo de cosas sin ton ni son, es haber perdido las esperanzas de que haya un sistema carcelario justo, retributivo, ordenado, que permita que una persona pase diez años en la cárcel y pueda haber pagado su culpa y reinsertarse luego en la sociedad.

Estamos perdiendo la esperanza de lograr un sistema carcelario justo y una política criminal correcta. Yo no pierdo la esperanza, pero lo que pasa es que, con las sanciones que estamos llevando adelante –aisladas, desmesuradas– vamos a conseguir el efecto absolutamente contrario al buscado. Si nosotros mandamos por seis años a la cárcel al que vende celulares truchos y lo juntamos en el mismo régimen carcelario con un asesino, violador de menores, cuando ese tipo que ha ido preso por vender un celular trucho salga –a los seis años, que es la pena que le dimos acá–, va a violar a cinco personas.

Recién, cuando amablemente me concedió la interrupción el senador Agúndez, puse el ejemplo de lo que dijo este juez de instrucción del Chaco. Lo veía esta mañana. Absolutamente alarmado dijo: “Voy a comenzar a liberar”. Y no dice que va a liberar a sospechados. No, no; se refería a liberar personas, con la certeza de que han cometido delitos, porque no están en condiciones de ser albergados en la cárcel. El juez va a comenzar a arrogarse una facultad que hasta

es propia de los poderes Ejecutivos, como es la de conmutar penas. Porque el régimen carcelario en la provincia del Chaco, y seguramente en todas las provincias argentinas, no da abasto. Entonces funciona para fabricar nuevos y más perfeccionados delincuentes.

Por lo tanto, en el marco de una reforma más estructural, más profunda de la política criminal, del sistema carcelario, como está planteada o formulada inclusive, adhiero absolutamente en muchos puntos. Por ejemplo, en la unificación de los códigos procesales. Adhiero, lo aplaudo y creo que cuanto antes tiene que hacerse. De manera que el régimen carcelario sea de la Nación; que todo el régimen carcelario, que todas las cárceles, pasen a la Nación; que haya secretaríos de ejecución penal en todas las provincias. Es decir, que cuanto antes nos pongamos a trabajar en cuestiones que son absolutamente conexas a esto que estamos haciendo, mejor.

No es que no me guste que el asesino y violador pase toda la condena efectiva en la cárcel, que no salga. A mí me gusta y creo que no tiene que salir. Ahora, a ese asesino y violador no lo puedo poner en el mismo pabellón que aquel que ha vendido un celular trucho –les reitero–. Porque lo que estoy haciendo es fabricar otro violador de ese delincuente menor. Entonces tenemos que avanzar en las reformas más profundas de la política criminal, y que tenga en cuenta las distintas realidades del país.

Decíamos también anteriormente que los casos de secuestros extorsivos o delitos aberrantes no existen como tipos delictivos en nuestras provincias. Toda la legislación que estamos llevando adelante acá es para la Capital Federal y el conurbano bonaerense, exclusivamente. No existen en el resto del país estos tipos delictivos.

Pero además estamos legislando de manera absolutamente incoherente con lo que está pasando en otras partes, en lo que respecta a una política criminal. Por ejemplo, hoy estamos votando acá la creación de más fiscalías en los barrios de la Capital Federal. Y ayer, en una reunión del Consejo de la Magistratura, la Corte Suprema no quiso habilitar la creación de un tribunal oral en Rosario por falta de presupuesto. Pese a que el fuero penal criminal en Rosario está absolutamente sobresaturado y necesita imperiosamente la habilitación de otro tribunal oral.

Se ha sancionado en este Congreso una ley que establece ampliar las competencias a los tribunales orales de las provincias. Porque son superestructuras, estructuras muy costosas para muy pocos delitos federales que hay en las provincias. En las provincias habrá una condena—cuando hay— por año. Hay muchas provincias donde los tribunales orales tienen una sola condena por año, si es que se da esa condena. Pasan años donde no hay condenas y se mantienen todavía esos tribunales orales.

En función de eso el Congreso ha sancionado una ley muy sabia, que es ampliar las competencias para que dejen de litigar, o para que las cuestiones civiles, comerciales y laborales vayan a las cámaras federales en otras provincias, como en el caso de La Rioja, Catamarca y otras provincias argentinas, que tienen que ir a Tucumán o a Córdoba, para que sí tengan la instancia de apelación, en otros fueros, en la misma provincia y aprovechar ese gasto. No se ponen en marcha porque dicen que falta presupuesto. Pero ahora estamos votando una ley para hacer más fiscalías en la Capital Federal.

Sr. Presidente (López Arias). — Señor senador Yoma, la señora senadora Ibarra le solicita una interrupción.

Sr. Yoma. — No se la concedo.

Sr. Presidente (López Arias). — Señora senadora Ibarra, la interrupción no es concedida.

Sr. Yoma. — No estoy polemizando con los amigos legisladores por la Capital Federal. La señora senadora Ibarra sabe cuál es mi posición respecto de la autonomía de la Capital Federal. Esto lo sabe desde la Convención Constituyente. Tengo proyectos que han sido sancionados por este Senado, en donde expreso que la Capital Federal no tiene que tener ni policía ni Justicia, porque no es una provincia. Tengo una posición al respecto y no viene al caso discutirla ahora.

Lo que digo, señor presidente, es que tenemos que atar—con el perdón de la expresión— las leyes que sancionamos acá con lo que está pasando afuera en todo lo que tiene que ver con la política criminal, regímenes carcelarios y organización de la Justicia. Si no, agravamos los problemas en lugar de solucionarlos.

Hoy, con estas leyes que van a duplicar la población carcelaria, con el actual régimen criminal y la organización de la Justicia en las provincias, vamos a agravar el problema.

Estamos poniendo una bomba de tiempo a la sociedad. Fijese lo que hacemos. Además de agravar penas, limitar la libertad condicional, la ejecución condicional y las excarcelaciones, estamos impidiendo la posibilidad de conmutación de penas. Hay proyectos presentados para que los gobernadores de las provincias no puedan conmutar penas. Hoy mismo estamos diciendo que a una persona que tome unos vinos de más o tenga droga para consumo personal, que no es delito, y cometa un delito, se le revoca la libertad condicional.

Estamos agravando la situación y va a explotar el sistema carcelario. En todas las provincias estamos viendo anuncios. Hay que avanzar de manera integral en las reformas.

No me opongo—reitero— a que autores de delitos aberrantes cumplan efectivamente su condena y no accedan a la libertad condicional. Lo que digo es que no mezclemos esto con otro tipo de conductas que quizá no merezcan una pena mayor.

Este es el mismo debate que se da en el régimen penal de menores. No estoy en desacuerdo con la baja de la edad en la imputabilidad de los menores. Lo que creo es que debe haber un régimen integral penal juvenil que contemple la posibilidad de la reinserción del menor. En el Senado hay iniciativas importantes, como es el caso de la presentada por la señora senadora Leguizamón. Que el régimen penal no sea la universidad del delincuente; del joven que va a estudiar, con la actual Ley de Patronato, para recibirse de delincuente cuando adquiera la mayoría de edad.

El problema es mucho más integral. Por eso, señor presidente, con la mayor parte de los anuncios que hizo el Poder Ejecutivo respecto de las reformas al tema de la seguridad estoy de acuerdo. Creo que hay que avanzar de manera simultánea y no de esta manera.

En las provincias hay mucha resistencia en el tema de la unificación de los códigos y los sistemas carcelarios. Hay una prevención, porque las provincias están pensando que no vaya a ser que terminen recibiendo a los que delinquen en la Capital Federal y en el conurbano bonaerense. Y que las provincias terminen pagando por los que delinquen acá porque por agravamiento de las condiciones vayan a delinquir

en las provincias, donde obviamente los mecanismos de seguridad son más flexibles.

Las provincias tienen algunas prevenciones lógicas. Las provincias tienen prevención en el tema de la creación de fiscalías. La Capital Federal tiene el doble de ingresos per cápita y mejores condiciones de vida que el resto de las provincias argentinas. Tiene más de 4.000 pesos de ingreso por habitante. En ninguna provincia se llega a más de 1.800 pesos de ingreso per cápita. El nivel de vida en la Capital Federal es mucho más alto que acá. Y no vaya a ocurrir que las provincias terminen pagando las fiscalías, los tribunales, etcétera.

Realmente, el debate es muy profundo. Hace a la relación de la Nación con las provincias. Entonces, seguir agravando la sanción penal lo único que va a lograr, si no tomamos integralmente el tema, es agravar el problema y no solucionar nada.

Señor presidente: con la anuencia de la Cámara, voy a pedir abstenerme de votar estas leyes que estamos tratando.

Sr. Presidente (López Arias). – Tiene la palabra la señora senadora Arancio de Beller.

Sra. Arancio de Beller. – Señor presidente: estamos intentando encontrar solución a lo que es la inseguridad. Estamos tratando de encontrar el camino para que los ciudadanos honestos manden a sus hijos a la calle, a estudiar y sepan que a la noche van a volver. Y éste es un tema que tiene muchas aristas.

Me parece importante marcar que, entre tantas demandas insatisfechas en esta Argentina, hoy se hace visible la de la inseguridad. Hoy, éste es el tema que convoca y moviliza, es el tema que llena plazas, cuya solución urgente preocupa, es lo que la gente está pidiendo. Y no hay que perder de vista que, quizás, las soluciones rápidas son nada más que soluciones parciales a un gran problema porque la respuesta de verdad, esa que lleva la solución a lo que hoy es un drama profundo, es mucho más amplia y tiene que ver con otros temas que no se centran únicamente en leyes más duras.

Del diagnóstico surge que son alarmantes los números de la delincuencia. Pero también son alarmantes los números de la exclusión. Sin querer relacionar pobreza con criminalidad, digo yo que la marginalidad seguramente potencia las ocasiones del delito. Teniendo en cuenta esa idea,

desde el año 83 a la fecha se sancionaron más de doscientas leyes penales. Y hoy hay más delitos que en aquel entonces. Por lo cual, el tema de fondo, creo que no es sólo el de leyes más duras para quienes lo merecen. De verdad creo que la sanción, para el que cometió delitos aberrantes, debe ser tan dura como el daño que se le hace a una niñita que es violada, como el dolor que sufre la familia de un secuestrado, como el daño que se le hace a un joven cuando se le mata a los papás en la calle. En eso coincido. Pero digo que eso no es todo, es sólo una parte. Esto es ir nada más que a las consecuencias, pero esto tiene una causa. Y la causa, fundamentalmente, es la exclusión.

Si no tenemos políticas sociales que contengan, si no tenemos políticas educativas que realmente masifiquen la educación, si no tenemos políticas para generar trabajo genuino, esto es muy difícil. Siempre vamos a seguir sobre las causas, sin atacar el tema de fondo, que es una profunda inequidad social que ha ido creciendo paralelamente al aumento de los índices del delito.

Por ello, si la cuestión de fondo es que queremos una sociedad segura, en forma prioritaria debemos solucionar todo lo relacionado con encontrar los elementos para una inclusión de verdad, para un país que sea de todos, con una escuela que sea de todos, con trabajo para todos.

Yo no voy a hablar de todos los temas, porque no soy una experta, pero sí quiero decir que me parece importante que nos detengamos en todos aquellos que intervienen para combatir el delito. Uno de los organismos que intervienen en este tema es la policía, que debería cumplir un rol de prevención, de investigación y de detención. Pues bien, nosotros sabemos que generalmente siempre se habla de la crisis económica, pero no debemos olvidarnos de que la crisis moral y cultural es muy profunda. Por consiguiente, hoy estamos hablando de policías a las que ninguna madre estaría dispuesta a recurrir para pedir ayuda frente a un problema con su hijo. Lastimosamente, son tantos los casos que se han dado en los últimos tiempos que el descrédito empieza a abarcar a la institución, que es lo verdaderamente grave.

En la misma cadena están los fiscales, que son los encargados de recabar las pruebas; los jueces, que tendrán que aplicar las leyes pena-

les cuya modificación hoy estamos tratando y, finalmente, están los institutos carcelarios, que hoy se encuentran colapsados a punto tal que hay muchos detenidos en comisarias. Precisamente, el 50 por ciento de las personas privadas de su libertad y que están alojadas en esas cárceles está cumpliendo prisión preventiva. Por lo tanto, en esas mismas cárceles hoy están detenidos quienes han cometido delitos graves junto con aquellos otros que han cometido los delitos más aberrantes.

Entonces, si no se va solucionando cada una de estas cosas que están muy mal será muy difícil que nosotros, desde el rol que nos toca cumplir —que no es todo, por cuanto nuestra tarea es sólo un aporte—, podamos ayudar a garantizar seguridad.

Por último, anticipo mi voto afirmativo en el convencimiento de que quien produce daños muy graves debe responsablemente pagar por lo que ha hecho. De cualquier manera, tengo la convicción de que ésta no es la solución, sino la respuesta que hoy podemos dar frente al gran problema de la inseguridad. Reitero que si no llevamos a cabo acciones concretas que provean a una verdadera inclusión de aquellos que están al margen de la sociedad, el problema de la inseguridad no lo vamos a solucionar nunca.

Sr. Presidente (López Arias). — Tiene la palabra el señor senador Eduardo Menem.

Sr. Menem. — Seré muy breve, señor presidente. Simplemente, voy a exponer para fundamentar mi voto, que será favorable a las modificaciones introducidas a distintos artículos del Código Penal y en contra del proyecto sobre creación de fiscalías de distrito en el territorio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

En cuanto al primero de los temas, creo que está muy trillada la discusión acerca de si se aumentan las penas o no. En ese sentido, creo que aquello de que no podemos aumentar las penas porque no hay cárceles suficientes no es un argumento válido; en todo caso, habrá que construir nuevas cárceles.

En lo que se refiere al argumento de que las penas no sirven como elemento disuasorio, el señor senador Agúndez recordó, cuando tuvo la amabilidad de citar a quien habla, que además de un efecto disuasorio la pena tiene un carácter retributivo, de castigo. Realmente, la pena es un castigo para aquel que ha violado la nor-

ma penal y, además, también tiene el efecto de defender a la sociedad de todos aquellos que cometen delitos contra las personas. ¿O no es una defensa de la sociedad sacarlos de circulación por el tiempo que se determine?

Ahora, si la pena es alta o es baja, eso lo determina el legislador de acuerdo con el momento en que se vive. No podemos comparar la situación en el tiempo en que se sancionó el Código Penal con la que vivimos ahora, que estamos en un verdadero estado de emergencia en materia de seguridad. Entonces, tenemos que dictar las normas, pero no las que piden los diarios o una manifestación, sino las que de acuerdo con nuestro criterio deben servir para sacar de circulación a todos aquellos que han creado este clima de inseguridad que vive la sociedad.

También es cierto que con el aumento de las penas solamente no va a disminuir la cantidad de delitos. Esto no hace sólo a la modificación del Código Penal. Esto hace a las políticas de seguridad; y como recién recordaba la senadora por Jujuy, hay muchos otros factores: el social, el educacional, la formación y contención familiar, que también tienen mucho que ver.

Y por cierto esto tiene que formar parte de una política de seguridad; y la verdad es que las políticas de seguridad que ha llevado adelante el actual ministro de Seguridad y ese grupo de fiscales que lo acompañan —en otra época se denominaban “Los Centuriones”—, ha fracasado. Hay que reconocerlo, ya son tres, cuatro, cinco planes que ha lanzado y cada vez hay mayor cantidad de delitos; no ha disminuido. Por más que se hicieron anuncios, inclusive antes de una campaña electoral, en donde decían que había disminuido el delito, ello no es cierto; no ha disminuido. Entonces, eso no lo podemos hacer nosotros. Como legisladores tenemos que ajustar la norma a lo que pensamos que la sociedad necesita en estos momentos.

Personalmente creo que hay que agravar las penas, por ese carácter retributivo que tienen, y ello además tiene que ser complementado con las políticas en materia de seguridad. Y espero que las medidas de este nuevo plan, aunque hay algunas cosas que son inadmisibles desde todo punto de vista, sean razonables y puedan generar mayores condiciones de seguridad. No obstante, también entiendo que es necesario hacer un estudio a fondo y en serio, no de acuerdo

con las circunstancias del momento y para quedar bien, presentando un plan con varios puntos, de los cuales muchos de ellos son realmente incomprensibles.

En los estudios que se han hecho en otros países sobre la forma de disminuir las condiciones de inseguridad, se ha demostrado que en los lugares más iluminados ha disminuido la cantidad de delitos. Entonces, no quiero pensar que si se nos viene arriba la crisis energética va a aumentar también el número de delitos. En ese sentido se han hecho estudios en aquel famoso Programa Tolerancia Cero, instrumentado por el alcalde Giuliani, de Nueva York.

Voy a votar favorablemente el aumento de penas, porque creo que si no disuadimos, por lo menos sacamos de la circulación y castigamos a estos elementos antisociales que perturban la convivencia pacífica en la sociedad argentina.

Ahora bien, en cuanto al tema de las fiscalías, no es que vote en contra porque crea que la medida es mala. Realmente no tengo información suficiente como para aprobar sobre tablas una iniciativa que ha llegado a mi conocimiento ayer y que además hoy la estamos modificando de manera importante en el recinto, aunque por lo que escuché parece ser razonable lo que se cambia. Entonces, todavía tampoco conozco la norma. Por eso me pregunto cuál es la urgencia de votar hoy este proyecto. Yo necesito conocer el texto; me gustaría conocer, por ejemplo, cuáles son los resultados concretos informados por gente que tenga conocimiento sobre la creación de esas fiscalías barriales o distritales en la Boca, en Saavedra. Algunos dicen que el resultado fue bueno. Sin embargo, yo escuché que la mayoría de los fiscales se oponen, porque dicen que son malas. Aunque se ha dicho que ello obedece a razones de comodidad, porque los fiscales no quieren ir a los barrios. Es decir, hay una polémica sobre la que no quisiera emitir opinión hasta que no tenga un conocimiento acabado de cuáles son los resultados de haber descentralizado las fiscalías.

Por otra parte, cuando hace un momento pedí el tratamiento sobre tablas de un proyecto de declaración, se me dijo que debía tener dictamen de comisión. Sin embargo, en este caso se va a tratar sobre tablas un proyecto de creación de fiscalías, además con modificaciones en

el propio recinto. Esta forma de legislar no la entiendo ni comparto.

Sí quiero recordar que en la reforma de la Constitución de 1994 le dimos jerarquía constitucional al procurador general de la Nación. Y entre los deberes y atribuciones que tiene el procurador general está el de fijar la sede y jurisdicción territorial de actuación de las fiscalías generales y el grupo de fiscales, fiscales adjuntos y auxiliares que colaborarán con ellos sin necesidad de sujetarse a la división judicial del país.

—Ocupa la Presidencia el señor presidente provisional del Honorable Senado, senador Marcelo Alejandro Horacio Guinle.

Sr. Menem. — Es decir, hoy el procurador tiene facultades que le da la propia Constitución para establecer las zonas de actuación.

Ahora bien, se le quiere delegar al procurador facultades de creación de nuevas fiscalías o de establecer fiscalías barriales, cuando por otra parte ha entrado un mensaje del Poder Ejecutivo —y se ha fijado audiencia—, para que se haga cargo un nuevo procurador fiscal. ¿No sería conveniente escuchar a este funcionario propuesto cuando asuma para que sepamos qué es lo que quiere que se haga respecto de las fiscalías? ¿No sería una actitud de prudencia nuestra esperar a que asuma y que él determine o proponga y que por lo menos escuchemos cuál es su criterio? El doctor Riggi es un penalista reconocido y de una vasta experiencia.

Me parece que es sumamente inconveniente y apresurado el tratamiento de este proyecto, al menos en mi caso porque no conozco el resultado del funcionamiento de las fiscalías barriales. Considero que habría que pasarlo a comisión para emitir dictamen y escuchar las opiniones de los expertos en estos temas. Respeto todas las opiniones, pero no creo que este asunto tenga urgencia, que sea imperioso sancionarlo hoy cuando la mayoría de los senadores que estamos acá no hemos tenido acceso a esa modificación que se va a proponer en el recinto.

Estamos votando ni más ni menos algo que va a modificar el funcionamiento de la procuración general, que como recordaba le hemos dado jerarquía constitucional y hemos reconocido la importancia que tiene el ejercicio de la acción requeiriente. El que ejercita la acción penal del Estado, como se sabe, es el fiscal. Entonces, no

es un tema menor. Además tenemos que poner en claro en esta discusión que el fiscal, como se ha dicho en estos casos, no interviene en la prevención del delito sino que ejerce la función requiriente, excita la función jurisdiccional después de producido el delito.

Respecto de la descentralización o no, me gustaría escuchar a los que tienen experiencia en la materia y que tengamos las estadísticas para saber el resultado en los lugares donde han funcionado las fiscalías distritales.

Por eso, señor presidente, voy a apoyar los dos proyectos referidos a las modificaciones al Código Penal y no voy a votar afirmativamente, por no tener elementos de juicio suficientes y por considerar apresurado su tratamiento sobre tablas, la delegación en el procurador de la creación de nuevas fiscalías, si es que así se denomina el proyecto, porque con el cambio que se propone no sé si es correcto hablar de delegación. Igualmente, más allá de eso, adelanto mi voto por la negativa.

Sr. Presidente (Guinle). – Tiene la palabra el señor senador Rossi.

Sr. Rossi. – Señor presidente: adelanto mi voto afirmativo para los proyectos en tratamiento.

Tengo la convicción de que la inseguridad se ha instalado en la sociedad de los argentinos. Es más: tengo la convicción de que hoy la inseguridad es un problema que se ha instalado en todo el mundo.

Hace pocos días, mientras visitaba el hermano país de Chile para realizar la reunión constitutiva del Parlamento Latinoamericano, pude ver que el tema dominante en esos días era, precisamente, el de la inseguridad. Veía a las máximas autoridades del país tratando de explicar a los medios de prensa y a toda la ciudadanía los esfuerzos que venía haciendo el gobierno en la construcción de nuevos establecimientos carcelarios, compra de patrulleros e incremento del número de efectivos de las fuerzas de seguridad.

Simultáneamente, veía lo que acontecía en Brasil donde, seguramente, en una medida fuertemente cuestionada, se veían intenciones de levantar barreras arquitectónicas a través de nuevos muros que separaran a los habitantes que viven en los sectores alejados a las denominadas favelas.

Sé que para abordar el tema de la inseguridad hay que hacerlo integralmente y en muchos frentes y, al respecto, tengo la convicción de que hoy trabajamos sobre uno de ellos, aunque quizás no en el momento cronológico en que debería haberse hecho. Obviamente, uno sabe que el Código Penal se aplica para quienes delinquen porque quienes viven socialmente en paz lo asumen como una ley que no los alcanza.

Efectivamente, creo que hay que trabajar en la prevención, en la capacitación del personal policial y penitenciario, en el refuerzo del equipamiento de las fuerzas de seguridad y en la actualización legislativa de todos los procedimientos relacionados con la ley penal. Pero, a la vez, creo que hay una gran fuente creativa de delitos cuando se alude a la pobreza, la exclusión social, la deserción escolar y la falta de contención dentro de los hogares.

Reitero que hablamos tan solo de uno de los temas que, precisamente, es el agravamiento para los delitos aberrantes y la mayor exigencia para el otorgamiento de la libertad condicional.

En este sentido, tengo la sensación de que la sociedad afectada vive con estupor e impavidez cuando luego de tomar conocimiento de la detención y juzgamiento de quienes han deteriorado la vida de una familia y de la sociedad, al poco tiempo se encuentran conviviendo entre ellos. Tal vez pensaron que quien cometió el delito más aberrante, cuanto menos no iba a compartir generacionalmente con ellos o con sus hijos el mismo espacio temporal. Pero hoy vemos a diario que por imperio de la aplicación de las leyes en vigencia, nuevamente se incorporan en la sociedad quienes cometieron el peor de los delitos, o sea, el secuestro seguido de muerte, con extorsión, violación, etcétera. Y en ninguno de esos casos –las encuestas y las estadísticas lo muestran claramente– se habría garantizado en forma mínima la reeducación del reo para su reinserción social.

Hoy quienes trabajan en el tema de las encuestas miden permanentemente la opinión y el sentimiento de los argentinos en las distintas geografías del país. En ese sentido, creo que vamos a coincidir en que el principal problema que enfrenta la gente, o sea, el que está primero en sus necesidades, es la inseguridad. Creo que basta recorrer cualquier barrio del país para ver...

Sra. Giri. — ¿Me concede una interrupción, señor senador?

Sr. Presidente (Guinle). — Señor senador Rossi: la señora senadora Giri le solicita una interrupción, ¿se la concede?

Sra. Giri. — Señor presidente: quiero aclarar que en la provincia de Córdoba el principal problema de los cordobeses no es la inseguridad.

Sr. Presidente (Guinle). — Continúa en el uso de la palabra el señor senador Rossi.

Sr. Rossi. — Señor presidente: no comparto el criterio de la señora senadora Giri, pero por supuesto acepto su posición.

Quiero insistir en que las encuestas marcan que el principal problema de los argentinos es la inseguridad. Y obviamente, cuando uno pregunta sobre las razones que la originan, aparecen fundamentalmente los motivos que expresara anteriormente, o sea, la desocupación, la deserción escolar y la marginalidad social.

Pero en el marco de lo que estamos hablando, es decir, de una sociedad vulnerada por delitos realmente graves, creo que hoy por medio de este proyecto estamos precisamente poniendo un límite a través de un agravamiento de las penas. Estoy convencido de que el tema de los cincuenta años para la acumulación de las penas o los treinta y cinco para la obtención de la libertad condicional es opinable, pero me parece que estamos brindando una respuesta legislativa a la sociedad.

También quiero expresar con relación al tercer proyecto, sobre creación de fiscalías, que lo voy a acompañar, aunque comparto lo expresado por el señor senador Menem en cuanto a que debió haber tenido un mayor tratamiento en las comisiones respectivas. Sin embargo, parecería que se trata de una urgencia.

De todos modos, resalto que también es urgente la creación de nuevos juzgados en las provincias, particularmente en la de Córdoba, motivo por el cual he presentado un proyecto de ley para la creación de un juzgado federal en San Francisco. Por supuesto, al igual que otras provincias, considero que tenemos derecho a pedir la misma celeridad.

• Todos los legisladores de mi provincia estuvimos el lunes cenando con el gobernador, fundamentalmente para tratar el tema de la coparticipación, pero en esa reunión surgió el tema de la

seguridad. Y en esa ocasión, el gobernador nos pidió mecanismos para agilizar desde el punto de vista legislativo el tema del IVA en la compra de patrulleros, el tema de los chalecos antibalas y, en definitiva, se mostró preocupado por equipar a la policía de la provincia de Córdoba de los nuevos instrumentos necesarios para poder enfrentar el delito.

Señor presidente: me parece que el esmero y esfuerzo que este cuerpo legislativo ha puesto en la consideración de este proyecto de ley y de todos los otros que tienen que ver con modificaciones al Código Penal, también debería estar presente para tratar las iniciativas necesarias para atacar los otros frentes.

Realmente me gustaría —y obviamente adelante totalmente mi predisposición al respecto— que cuando tuviéramos que hablar de la contención de los chicos en las escuelas, de la reeducación en las cárceles y del fortalecimiento de los sistemas penitenciarios, obviamente tengamos la misma vocación y la misma rapidez para trabajar en este sentido.

Hoy yo también escuché las declaraciones del juez de instrucción de la provincia hermana del Chaco —y comparto lo que dijo el senador Yoma—, que denunciaba el hacinamiento de los presos. Ahora bien, por más de que se le dé a esta gente un tratamiento de excarcelación acelerada o no —porque creo que aclaró que lo iba a hacer únicamente con la gente que no tuviera proceso y la que estuviera en condiciones de obtener la libertad condicional—, creo que lo que dejaba en claro la noticia era una denuncia, que seguramente no constituirá un caso aislado en el país. Donde haya hacinamiento de menores y mayores, donde no haya contención, educación y formación para integrarse nuevamente a la vida civil, realmente quienes entran por pequeños delitos van a volver luego por graves delitos.

Este creo que es un gran tema que tal vez no se resuelva con la construcción de más cárceles, aunque celebro que se haga. Porque el hacinamiento hoy por hoy no se lo debemos adjudicar solamente a que ha crecido la población carcelaria. Sería una ingenuidad. Acá el hacinamiento se ha producido por una falta de creación y de construcción de infraestructura adecuada para que realmente el país tuviera muchas cárceles.

Sucede como con los hospitales públicos. Hoy nos damos cuenta de que están saturados y que a las once de la mañana de un sábado nos encontramos con que no tienen cabida. Y le echamos la culpa, por supuesto, a que temporalmente se han agravado las situaciones de gripe o a que hay una enfermedad episódica que se ha instalado en la sociedad. Sin embargo es que realmente no se ha invertido para tener nuevos lugares, a fin de dar una contención social que si se ve agravada por gente que ha quedado excluida de la posibilidad de tener obras sociales.

Pero con respecto a este tema de la seguridad escuchaba particularmente al senador Agúndez, como miembro informante de este proyecto, que lo planteaba como un problema de Estado. Ahora bien, la solución a este problema de Estado no se debe agotar en lo que hoy estamos considerando—con el agravamiento o nuevas condiciones y exigencias para conseguir la libertad condicional—, sino que debemos efectuar un tratamiento integral, porque los problemas de la sociedad son los que van generando los nuevos delincuentes.

Hoy por hoy, si nosotros vemos que hay chicos de la calle de pequeñísima edad abandonados a su suerte; si vemos que hay una industria atrás de esos chicos para que fortalezcan el negocio de la venta de flores o de pequeñeces; si vemos que esos chicos han abandonado el régimen escolar, no podemos ser tan incautos de pensar que dentro de pocos años esos chicos primero no estarán en los institutos de prevención, después no irán a los de corrección y después no terminarán en las cárceles públicas.

Por esa razón, y entendiendo que ése es solamente uno de los frentes, voy a acompañar esta iniciativa. Pero también hago votos para que respecto de los próximos frentes tengamos la misma celeridad y el mismo compromiso que hemos demostrado hasta ahora.

Sr. Presidente (Guinle). — Tiene la palabra la senadora Ibarra.

Sra. Ibarra. — Señor presidente: como estamos tratando tres proyectos de ley distintos y que además no tienen la misma naturaleza ni los mismos objetivos, voy a considerarlos por separado.

Respecto de la iniciativa que viene de la Cámara de Diputados, que modifica el artículo 124 del Código Penal en cuanto establece reclusión

o prisión perpetua en los casos de los artículos 119 y 120—violación y estupro seguidos de muerte—, quiero decir que voy a acompañarla favorablemente.

Se han dicho muchas cosas acá. Me pareció interesante el análisis de los tipos jurídicos que hizo la senadora Conti y casi podría adherir a él. Creo que igualmente las interpretaciones jurisprudenciales no siempre lo siguen, y considero que es bueno dejar en claro que la violación o estupro seguida de muerte debe tener prisión o reclusión perpetua.

No lo vinculo al tema de agravamiento de penas per sé. Voy a insistir en lo que dije. Para mí, el agravamiento de penas no es de izquierda ni de derecha; no es de garantistas o de represores. Creo que las penas deben ser adecuadas, proporcionales, tener escalas razonables en el Código Penal, que es el que, en definitiva, hace la amenaza de atender a la gravedad de determinados hechos y marcar las escalas de la amenaza con la que el Estado pretende castigar los hechos delictivos.

Creo que hay penas que tenemos muy por debajo de lo que las deberíamos tener en el Código Penal. Por ejemplo, muchos de los casos de corrupción de funcionarios públicos tienen penas muy bajas. Creo que nunca se trajo a este recinto el grave problema de los delitos de corrupción de funcionarios públicos.

Nosotros nos horrorizamos acá con lo que escuchamos respecto del caso Meller, que le ha costado millones de pesos al Estado argentino. Y, sin embargo, son todos delitos excarcelables, de condena condicional. Nunca vamos al tema procesal de la prueba de estos delitos. Y efectivamente, ya que tanto se habla de lo que pide la sociedad, ésta tiene una enorme percepción de que acá hubo una fiesta de corrupción, sobre todo en la década del noventa y en los últimos años en la Argentina. Tenemos en la cárcel, para muestra, un botón. Pero lo cierto es que aquí no escuchamos pedir aumento de penas para este tipo de delitos. Y creo que hay que estudiarlos y analizarlos. Porque si el hecho cultural más importante que provocó la Argentina en las últimas décadas fue la impunidad, una de las grandes percepciones de impunidad fue que en esa época, en que se cometieron enormes delitos que costaron plata que no fue a la educación, a la salud o para mejor seguridad, se la llevaron

muchos funcionarios corruptos y los grupos económicos asociados. Sin embargo, no escuchamos a los responsables de esa época pedir aumento de penas para esos delitos y si los vemos hoy horrorizarse con otros.

Entonces, creo que las penas tienen que ser responsables, adecuadas, y que es una pena adecuada la prisión o reclusión perpetua para la violación seguida de muerte.

En lo que hace a la modificación de la libertad condicional, artículos 13 y 14, quiero plantear que cuando se votó aquí y en Diputados que los delitos que consideramos aberrantes no fueran pasibles de libertad condicional, entendimos que existen hechos de tal gravedad que no merecen la posibilidad de una libertad anticipada sino que hay que cumplirla completa.

Ahora, cuando Diputados establece que para la prisión perpetua —esto es, de los delitos no aberrantes, porque para los aberrantes ya dijimos que no hay libertad condicional—, en vez de veinte años para la libertad condicional tienen que cumplirse, por ejemplo, treinta y cinco, creo que lo que estamos haciendo acá es un gesto de impotencia.

¿Qué quiero decir? Tengo la percepción de que acá nadie cree que alguien salga de la cárcel con posibilidad de resocializarse. Entonces, se escucha un reclamo social, y los legisladores vamos de atrás de un esquema. Decimos: miren, tráiganlo a la sociedad mucho más adelante; ténganlo en la cárcel la mayor cantidad de tiempo posible, porque yo sé que sale peor.

Por lo tanto, creo que lo que estamos haciendo hoy, si aceptamos estas modificaciones, es abandonar definitivamente un instituto de libertad condicional, asumiendo que no creemos que podamos reformar el sistema carcelario, el sistema de ejecución de penas y que directamente renunciamos a este instituto. Pero, además, en forma absolutamente impasible, porque nos tendríamos que ocupar de que quien está condenado a prisión perpetua cumpla veinte años para la libertad condicional y tener informes favorables para poder ser reinsertado.

En primer lugar, tendríamos que lograr que cumpliera los veinte años. Acá tenemos conmutaciones y una cantidad de interpretaciones de distinta índole que tendríamos que ordenar para que se cumplan, primero, los veinte años.

En segundo lugar, tendríamos que lograr que los informes para obtener la libertad condicional fueran fiables. Nadie cree que los informes que emanan del Servicio Penitenciario Federal, donde dicen que alguien está en condiciones de acceder a la libertad condicional, sean fiables. Lejos de ello, sabemos que se compran. Esto lo ha dicho la misma gente del Patronato de Liberados que vino acá.

Todos conocemos lo que pasa dentro de los servicios penitenciarios, donde los reclusos trabajan en actividades delictivas con bandas afuera con sus propios carceleros. Tenemos que ir a resolver esto. Pero no destruir un instituto que, en definitiva, todos los ciudadanos decentes y de bien lo que queremos es que si una persona que no cometió delitos aberrantes, cumple su parte retributiva en la cárcel y, efectivamente, está en condiciones de reinsertarse en la sociedad en forma acompañada por un patronato que funcione y pueda servir como una persona de bien, pueda recuperar la libertad.

No quiero abandonar —en esto voy a coincidir con el señor senador Yoma— la idea de poder contar con un instituto de libertad condicional y con una vocación de reinsertión de aquellos que cometieron un delito y pagaron parte importante de la pena, como son los dos tercios o los veinte años, para el caso de la prisión perpetua.

En este sentido, creo que era mejor la sanción del Senado, motivo por el cual, si el dictamen de mayoría va en el sentido de aprobar las modificaciones que introdujo la Cámara de Diputados, no voy a acompañarlo con mi voto y voy a plantear la insistencia en la sanción del Senado.

Finalmente, voy al proyecto de la creación de fiscalías. Quiero hacer una aclaración por los comentarios que hicieron algunos señores senadores preopinantes.

Primero, se crean fiscalías de distrito reordenando el personal, los funcionarios y los fiscales que actualmente existen en la Ciudad de Buenos Aires. Esto quiere decir que no se crean estructuras nuevas, motivo por el cual el artículo que habla del gasto dice: "El gasto que origina la puesta de funcionamiento de esto se atenderá con las partidas del presupuesto anual de gastos que se asigna en cada ejercicio". No se agregan nuevos gastos. Habrá gastos de la mudanza de la fiscalía al barrio, pero siguen sien-

do los fiscales con los funcionarios y empleados que existen actualmente, que es lo que menciona específicamente el proyecto.

Este es un primer punto a aclarar, porque no estamos creando siete fiscalías con toda su estructura, para lo cual tendríamos que estar asignando gastos y diciendo de dónde los vamos a sacar.

Quiero mencionar esto para tener en claro que acá hay un objetivo en el cual vienen trabajando tanto desde la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires como desde el gobierno nacional, que ha venido específicamente a pedir por este proyecto. El procurador anterior y quienes han trabajado toda la problemática de la seguridad en la Ciudad, han planteado poder poner a los fiscales en directa vinculación con los vecinos para poder dar respuesta a las necesidades de una ciudad con tres millones de habitantes que presenta problemáticas muy distintas en el centro, en los lugares aledaños al ámbito metropolitano y en los barrios. Llevar a los fiscales actuales que están todos encerrados en uno o dos edificios, a las zonas de los barrios, para que estén en contacto con los vecinos, que conozcan la problemática de la zona y que, además, haya memoria histórica del mapeo del delito de la zona donde se trabaja. Porque, de lo contrario, rotan veinticuatro fiscales por año en cada una de las zonas, sin poder saber qué es lo que venía pasando y sin tener una memoria histórica.

Esto como primer dato para saber de qué estamos hablando.

Segundo, efectivamente esto fue un tema que ya se trabajó en el Senado. Se sancionaron dos leyes por las cuales se crearon dos fiscalías distritales. Actualmente, se propone un reordenamiento de las fiscalías actuales hacia los barrios, como política de descentralización sin crear estructuras nuevas.

Es una política que tiene que ver con acercar al fiscal al vecino que está trabajando, donde se conocen los robos y las distintas patotas que actúan. Estas son todas cosas que puede ir conociendo el fiscal que está trabajando en el barrio. Y no que roten veinticuatro por año.

Tercero, con los fiscales que existen actualmente, por concurso de oposición y antecedentes y con sorteo de asignación de causas, se crea una estructura de fiscales para delitos complejos. Los robos y hurtos, por ejemplo, son los

delitos ordinarios que hay en cualquier barrio. Pero, a veces, hay delitos enormes, como los que se cometieron en el Concejo Deliberante, donde se ha encontrado innumerable cantidad de "ñoquis", donde se ha metido gente de todos los partidos políticos, funcionarios públicos. A veces tienen cuarenta o cincuenta cuerpos los expedientes del proceso, que tienen que ser investigados. Un fiscal que está trabajando todo el día en el barrio, y que tiene que ocuparse de esto no tiene forma de atender las dos cosas a la vez. Entonces los delitos complejos se derivan a un cuerpo de fiscales, a los cuales se les asignan por sorteo esas causas complejas y son designados, dentro del elenco actual de fiscales, por concurso de oposición y antecedentes.

Este es el sentido concreto de este proyecto. Quiero aclarar —y se lo digo al senador Rossi— que si algo hicimos los senadores de la ciudad que hemos estado sentados acá fue estar muy atentos también a las necesidades de las provincias. Nunca hemos obstruido, lejos de ello, la importancia de contar con un sistema federal. Porque si hay una antinomia mala para un concepto de país, ésta es la de interior y ciudad.

Lo cierto es que el ámbito metropolitano, en particular el conurbano bonaerense, es el que tiene el mayor índice de delitos y la política de descentralización apunta a poder atender mucho mejor al barrio y no a la creación de nuevas estructuras. Este es el sentido y es lo que se ha trabajado con el presidente del bloque mayoritario, se ha discutido ayer en la comisión. Y no se firmó dictamen sólo porque las últimas modificaciones se hicieron hoy, para poder marcar el tema de la transparencia de los sorteos, para determinar la creación de fiscalías de distrito que van a tener jurisdicción barrial y territorial establecida, porque las tiene que crear el Congreso y no se las puede delegar al procurador.

Toda la estructura de la ley es la misma. Simplemente se ha marcado que los sorteos tienen que estar determinados anteriormente, de forma tal que esto no pueda dar lugar al uso arbitrario por parte de uno u otro procurador. En este sentido, se habló con el Poder Ejecutivo, con el bloque radical, con el senador Agúndez, y hemos llegado a un texto que sigue todo el lineamiento ya trazado por el Senado y por la Cámara de Diputados, que lo trabajó en comisión y lo debatió en el recinto. Y se siguen los

lineamientos del proyecto de descentralización que tiene el Poder Ejecutivo acá, en una ciudad de tres millones de habitantes.

Dejo aparte el tema de autonomía de la Ciudad de Buenos Aires, no porque crea que se trate de un tema que no se va a tratar. Pero quien entendió que esto lo pagaba el interior, primero, entendió mal. Esto sigue siendo Justicia nacional y por eso lo estamos legislando acá. Y éstas van a ser fiscalías nacionales porque siguen siendo parte de la Nación.

Sr. Presidente (Guinle). – Le están pidiendo una interrupción, señora senadora.

Sra. Ibarra. – No.

Digo, para terminar, y aclaro que me ha consultado el prosecretario parlamentario en el sentido de si el Senado se tiene que constituir en comisión, por si hay asignación de gastos. La verdad es que el texto establece que se sostiene con el presupuesto anual de gastos, que es como se sostiene todo. Si se quiere hacer, si se quiere constituir la Cámara en comisión por hacerlo, lo hacemos. Pero no se está generando una partida extra, sino que se utilizará simplemente la que existe en el ámbito de la jurisdicción de Justicia.

Menciono esto para aclarar el tema de los fondos. Y, por supuesto, voy a acompañar este proyecto.

Sr. Presidente (Guinle). – Señora senadora Giri: ¿quiere hacer una aclaración?

Sra. Giri. – Pido la palabra.

Sr. Presidente (Guinle). – La anoto en la lista de oradores.

Sra. Giri. – Sí, por favor.

Sr. Presidente (Guinle). – Tiene la palabra el señor senador Pichetto.

Sr. Pichetto. – Dele la palabra a la senadora, señor presidente. De acuerdo con el orden, creo que después está el senador Losada y va estaríamos en el cierre del debate.

Sr. Presidente (Guinle). – En realidad, quiero saber si el senador Agúndez, como miembro informante, va a hacer uso de la palabra finalmente.

Sr. Agúndez. – Sí, pero seré breve.

Sr. Presidente (Guinle). – Entonces están anotados la señora senadora Giri, el senador Agúndez, el senador Losada y el senador Pichetto.

Tiene el uso de la palabra, entonces, la senadora Giri.

Sra. Giri. – Señor presidente: trataré de ser breve.

En primer término, tal vez, porque llevo muchos años de mi vida en esto de la política, quiero decir que, a veces, algunas cosas cansan, como el hecho de que las bancas se utilicen para hablar de cuestiones del pasado, que quizás haya que revisar entre todos y en conjunto.

Cuando hablamos de delitos aberrantes nos estamos refiriendo a otra cosa y no de delitos económicos. Porque, si no, tal vez haya que introducir como delitos aberrantes la muerte de veinte civiles inocentes que fueron a protestar pacíficamente a la Plaza de Mayo. Aquí estamos hablando de otro tipo de delitos.

En lo que se refiere a las penas, voy a apoyar los proyectos de modificación del Código Penal.

Con respecto al proyecto de creación de fiscalías de distrito en el territorio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, no coincido con muchos conceptos que se han vertido acá. El hecho de que en el ámbito jurisdiccional de la Ciudad de Buenos Aires la Justicia de la que estamos hablando es federal y, por lo tanto, nacional no significa que no sea una Justicia pagada por el conjunto de las provincias, de la misma forma que desde las provincias pagamos a la Ciudad de Buenos Aires sus bomberos, sus escuelas, la policía, etcétera. Tal vez, en algún momento tendremos que revisar este tema para lograr realmente el país federal del cual hablamos pero que no siempre construimos.

Sí me preocupa, como senadora de una provincia que tiene un poco más de tres millones de habitantes, el traslado de estos delincuentes al interior para que no delincan en la Capital. Y me preocupa su traslado a cualquiera de nuestras provincias. Pido a los señadores del interior –independientemente del partido político al que pertenezcan, dado que este no es un tema partidario– que pensemos si vamos a apoyar o no este proyecto que es un plan de seguridad municipal en su constitución, pero nacional en su ejecución. Yo no quiero que a mi provincia ni a ninguna otra la asolen bandas de delincuentes que lo único que van a hacer es cambiar de territorio. Como bien dijo mi gobernador, estos delincuentes no se jubilan. Tal vez, podamos resolver en la Ciudad de Buenos Aires algunos

problemas vinculados con algunos niños y adolescentes que no van a tener la posibilidad de trasladarse a otras zonas. Pero los adultos, que son los que hacen que los niños delincan, se pueden trasladar a cualquiera de nuestras provincias para tomar a nuestros pibes de rehenes o realizar sus prácticas mafiosas, como hoy sucede en la Ciudad de Buenos Aires.

Por supuesto, tampoco deseo ni quiero que en la Ciudad de Buenos Aires se cometan delitos sin que nosotros, senadores de la Nación, analicemos de qué manera podemos resolver el problema de la inseguridad en todo el país.

Yo represento a mi provincia pero, en realidad, nosotros somos senadores de la Nación y, por lo tanto, me siento parte de mi país, de norte a sur y de este a oeste. En consecuencia, me preocupa cualquier cosa que pase en mi país. En función de ello, no puedo dejar de advertir con gran preocupación que los problemas que no somos capaces de resolver de manera conjunta sean trasladados a nuestros territorios de una manera que no es justa y que no merecemos.

Por otro lado, no coincido con lo que se dijo en cuanto al tema presupuestario, por cuanto aquí sí va a haber erogaciones. Como se establece en el proyecto, las fiscalías a crearse van a ocupar inmuebles y yo me pregunto cuáles serán esos inmuebles. ¿El gobierno nacional tiene hoy inmuebles en cada uno de estos barrios? ¿Habrá que alquilarlos? ¿Habrá que arreglarlos? ¿No habrá que designar personal? ¿No habrá que afectar vehículos? ¿Y de dónde va a salir ese dinero? Mi pregunta va más allá. Quisiera saber cuándo a nuestras provincias se le van a asignar equitativamente los recursos necesarios para que también resolvamos nosotros los problemas de seguridad. Hoy la mayoría de las provincias argentinas paga la compra de sus móviles policiales, paga los chalecos de la policía, paga los revólveres y las balas y equipos de telecomunicaciones, y sé de que estoy hablando porque durante dos años he comprado esto para mi provincia estando en el cargo de secretaria general.

En mi provincia nos hemos hecho cargo de todos los gastos de seguridad y estoy segura, absolutamente segura, de que en la mayoría de las provincias que nosotros representamos esto es así, porque antes de que venga el dinero que necesitamos que no llega —con éste, con el

otro, con cualquier gobierno, éste no es un problema partidario ni de apoyo a éste o a otro gobierno, es un problema de la seguridad, que es de todos— recurrimos a la imaginación o a no se qué para conseguir, por lo menos parte de estos elementos imprescindibles para brindar seguridad a nuestros ciudadanos.

Coincido con el senador Rossi en que esto es una parte de un gran problema compuesto por muchas partes. Tampoco resolvemos la seguridad con los chalecos antibalas, con las balas o con cualquiera de los otros implementos que he mencionado y tal vez alguno se me ha pasado. El problema de la seguridad va mucho más allá y tal vez también tengamos que hablar de educación para hablar de la seguridad, pero ése no es el tema para tratar hoy en el recinto.

Les pido a los senadores del interior que no apoyemos una propuesta que nos va a perjudicar en las provincias. Les pido que trabajemos para una propuesta acordada entre todos nosotros. No voy a volver a mi provincia, en el tiempo que ocupe esta banca, con una ley que cualquiera de los ciudadanos me pueda reprochar por haberla votado en contra de sus intereses.

Sr. Presidente (Guinle). — Tiene la palabra el señor senador Agúndez.

Sr. Agúndez. — Señor presidente: recordé anteriormente que cuando votamos el artículo 13 en una sesión anterior, el resultado fue de cincuenta y nueve votos a uno. Allí fue donde se votó el núcleo más duro, precisamente, de la reforma penal. Por eso entiendo y justifico la consecuencia, en este caso, del senador Giusliniani.

Por otro lado, se decía que aquí la violación seguida de muerte debía encuadrarse dentro del artículo 80, inciso 7, del Código Penal, que contempla la prisión perpetua por homicidio calificado. No tengo entendido que la violación seguida de muerte tenga la misma tipificación del artículo 80, inciso 7. Este es un dolo específico para el delito de violación y un dolo específico, precisamente, para la muerte de la persona violada.

Los que votamos esto no somos demagogos, los que me conocen en el Senado, saben que nunca lo he sido; al contrario, siempre me ha tocado luchar contra los demagogos durante estos años.

Por otra parte, muchas veces escucho hablar a algunos que son oficialistas —y uno es

opositor-, y lo hacen de tal forma que hay dos discursos contradictorios, y a nosotros nos dejan en el medio. Hemos sido claros. Todos los proyectos que hemos votado por esta emergencia, por esta crisis en la seguridad, han sido enviados por el Poder Ejecutivo nacional o recogidos del petitorio Blumberg. El bloque de la Unión Cívica Radical, por directiva del partido, está colaborando en todos estos proyectos. Quiero que quede claro, porque por ahí me da la impresión de que los que tienen que estar más en línea con la Casa Rosada no lo están. Nosotros, que no estamos en esa línea, queremos ser claros que hemos colaborado con estas iniciativas.

Estos son los proyectos que ha presentado la Unión Cívica Radical en estos tiempos de inseguridad: unificación del sistema carcelario, juez de ejecución penal, implementación de gabinete interdisciplinario, patronato de liberados, imputabilidad de los menores de 14 años para causas en seccionales. Además, en la comisión hay un proyecto del senador Marino, respecto del cual se ha pedido preferencia en el tratamiento, relativo a elevar las penas en casos de corrupción administrativa de funcionarios públicos. Pero no ha habido vocación política en la mayoría de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales.

Con esto quiero decir que el bloque de la Unión Cívica Radical va a votar el dictamen de acuerdo con la reformulación que hace la senadora Ibarra. Además va a votar el artículo 13. Con relación a la prisión perpetua para la violación seguida de muerte, tenemos otra redacción. Pero que quede claro que es la misma idea: llegar a la prisión perpetua para este delito. Pero tenemos que ser comprensivos con el bloque de la Unión Cívica Radical de la Cámara de Diputados porque el artículo que sancionaron es claro y terminante. Hay que diferenciar la muerte intencional de la muerte no querida.

Sr. Presidente (Guinle). – Tiene la palabra el senador Losada.

Sr. Losada. – Señor presidente: diría que mi intervención es casi una formalidad porque el senador Agúndez ha fijado claramente el pensamiento y el sentimiento de nuestro bloque. Ha expresado el compromiso en el tratamiento y discusión de proyectos de ley para debatirlos en forma inmediata superando la cuestión reglamentaria, porque había reclamos de la sociedad.

Espero que tengamos esta misma dinámica cuando los proyectos...

Sr. Presidente (Guinle). – Perdón, senador Losada.

Senador Urquía: ¿usted solicita una interrupción? Los dos presidentes de bloque están cerrando la lista de oradores.

Sr. Urquía. – Para nada. Mi intención era hablar un rato antes que el senador Losada, para fundamentar mi abstención respecto del proyecto de creación de fiscalías.

Sr. Losada. – Con mucho gusto, que hable, aunque sea a través de una interrupción.

Sr. Presidente (Guinle). – Senador Urquía: el senador Losada le ha concedido la interrupción.

Sr. Urquía. – Señor presidente: quiero hacer un análisis de picapiedra, muy sencillo.

Este es el sector del Congreso verdaderamente federal. Desde que empecé a actuar en política imaginé un país distinto al que hoy tenemos. En mi humilde entender, gran parte de los problemas que tiene la Argentina surgen de las tremendas concentraciones de gente que tenemos en algunas ciudades. Lógicamente, ésta es una de las concentraciones que tiene un altísimo grado de delito. La inseguridad es muy distinta aquí que en las localidades del interior. En la medida en que disminuye el tamaño de las ciudades, el delito baja y la seguridad crece.

Esta mañana hacíamos un análisis, desmenuzando un poco la problemática de la coparticipación. Usted dirá, señor presidente, qué tiene ver esto con el tema que estamos tratando. Sin embargo, saben que el valor del gas en boca de pozo es más caro en Mendoza y en Neuquén que en Buenos Aires. ¿Y por qué? Porque a Buenos Aires y a Capital Federal se le contempla que el transporte es más caro. En consecuencia, reitero, se lo vende más barato para que todos paguemos igual. ¿Sabe que los subsidios para los transportes urbanos están fundamentalmente dados para que la gente se maneje mejor aquí? Altísimos subsidios para el transporte colectivo y ferroviario. Así podría enumerar muchas cosas más.

Por todo ello, como representante de una provincia del interior del país y como pretendiente de que definitivamente se dé un flujo inverso al que se crea a través de algunas normas que

intentan mitigar una problemática de aquí, que seguramente se trasladará hacia el interior, es que dejo sentado que me voy a abstener en la votación de la norma vinculada a la creación de fiscalías.

Reitero que quiero un país distinto porque cuando uno analiza profundamente la aplicación de las erogaciones del presupuesto nacional nota que una altísima parte se vuelca en esta ciudad.

El problema está en los cuatro o cinco grandes conglomerados urbanos que hay en la Argentina. Por eso voy a pedir que desde este cuerpo federal se intente cambiar el flujo de radicación de la gente. En el mundo se están creando alternativas para cambiar y acá, por el contrario, todo se iguala para favorecer a los grandes conglomerados.

Por eso, agradeciendo la interrupción que me ha concedido el señor senador Losada, fundamento mi abstención al proyecto al que oportunamente hice referencia.

Sr. Presidente (Guinle). – Continúa en el uso de la palabra el señor senador Losada.

Sr. Losada. – Después de escuchar las palabras del señor senador preopinante, queda doblemente autorizada su interrupción.

Efectivamente, lo que ha dicho es parte de una vieja, dura y, diría, lamentable discusión. Por ejemplo, en nuestra provincia se encuentra la represa de Yacyretá y pagamos por la energía el mismo valor que en Buenos Aires, pero a costa de las inundaciones y las enfermedades. Entonces, aquí está el país central que los senadores, en una auto-crítica que deberíamos hacernos, todavía permitimos que siga existiendo.

Señor presidente: decía que el senador Agúndez había expresado claramente la postura del bloque y que, además, había sido protagonista por responsabilidad política e institucional ante un reclamo muy fuerte por parte de la sociedad.

Espero que este tipo de comportamiento –que responde a una convicción– implique que seamos comprendidos cuando reclamamos el tratamiento de iniciativas presentadas por nuestra bancada. Nos podrá ir bien o mal, podrán ser aprobadas o no, pero es justo que los bloques de la minoría puedan considerar sus iniciativas en el recinto. No puede ser que estén congeladas y, ni siquiera, lleguen a la po-

sibilidad de que se dictamine sobre ellas. Esto hace al funcionamiento de una democracia realmente desarrollada.

Por estas razones, en su momento vamos a proponer una modificación al reglamento para que las comisiones, en el término de dos meses, tengan que dictaminar sobre las iniciativas en carpeta a fin de que no queden archivadas o cajoneadas. Esto debe pasar ya sea para bien o para mal. No puede ser que pasen años a la espera de que se produzca un dictamen de la mayoría porque ello constituye una mordaza a los bloques minoritarios. Creo que esto será algo muy saludable.

En cuanto a los temas en consideración, nuestro bloque votará según lo informará el miembro informante del bloque, senador Agúndez.

Se votará en general y en particular, afirmativamente el primer proyecto y para el segundo haremos propuestas de modificación.

Por otra parte, quiero decir que el presupuesto para la creación de las fiscalías ya está contemplado y no habrá requerimientos extras. Además, independientemente de eso, que no es una cuestión menor, debe constituirse el cuerpo en comisión porque la iniciativa implica gastos; y si bien éstos están contemplados, se requiere un tratamiento especial.

Entonces, más allá de que los recursos existen, como el proyecto demanda gastos, tenemos que constituir la Cámara en comisión. Creo que es la interpretación correcta para el tratamiento de este tercer proyecto.

Sr. Presidente (Guinle). – Gracias por su previsión, senador Losada.

Tiene la palabra el señor senador Pichetto.

Sr. Pichetto. – Señor presidente...

Sr. Presidente (Guinle). – Señor senador Pichetto: el señor senador Agúndez le solicita una interrupción, ¿se la concede?

Sr. Pichetto. – Cómo no.

Sr. Presidente (Guinle). – Tiene la palabra el señor senador Agúndez.

Sr. Agúndez. – Señor presidente: simplemente, quiero ratificar lo expuesto por el señor senador Losada.

Cuando la señora diputada Falbo, del bloque del Partido Justicialista, presentó el proyecto en la Cámara de Diputados, manifestó que no era

necesaria la anuencia de la Comisión de Presupuesto y Hacienda para su consideración, por cuanto los gastos ya estaban contemplados. Así lo entendió el presidente de dicha cámara. el señor diputado Camaño, razón por la cual el tema se trató sin la conformidad de la mencionada comisión. De tal modo que deben tener muy clara esta situación.

Sr. Presidente (Guinle). – Señor senador Agúndez: le aclaro que el señor senador Losada marcó otro criterio, que es el que tiene esta Presidencia. Así que si el recinto lo comparte, oportunamente vamos a constituir la Cámara en comisión.

Tiene la palabra el señor senador Pichetto.

Sr. Pichetto. – Señor presidente: como estamos tratando este tema, voy a exponer mi opinión. Creo que no hace falta constituir la Cámara en comisión respecto de este tema sobre el que existe un dictamen y el compromiso de tratarlo sobre tablas, no hay afectación de gastos nuevos y las partidas están asignadas en el presupuesto, en el ámbito del ministerio público –o sea, la Procuración General–, de donde surgirán los recursos para ir realizando la descentralización respectiva.

Por ello, creo que no es necesario constituir la Cámara en comisión ni pedir el dictamen de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, pero si la Presidencia decide lo contrario, nos someteremos a su decisión. Usted conduce la sesión, señor presidente.

También quiero brevemente efectuar algunas reflexiones sobre las iniciativas que hoy estamos considerando. En primer lugar, creo que la Cámara de Senadores ha tenido, frente a la problemática de la seguridad, una gran responsabilidad institucional. En ese sentido, quiero rescatar la tarea de todos los senadores: la desplegada por la Comisión de Justicia y Asuntos Penales que preside el señor senador Agúndez y la llevada a cabo por la Comisión de Seguridad Interior y Narcotráfico, que preside la señora senadora Sonia Escudero. Creo que hemos estado a la altura de las demandas de la sociedad.

Es decir, hemos abordado seriamente los temas y hemos elaborado nuestra agenda con proyectos e iniciativas que habían sido presentados por los señores senadores con anterioridad. La problemática de la seguridad tiene su punto de eclosión con el asesinato vil de Axel Blumberg

y con la convocatoria social que generó ese hecho, pero ya estaba instalada en la ciudad de Buenos Aires, en el conurbano bonaerense y en la Argentina desde mucho tiempo atrás. Por esa razón, habíamos presentado diversas iniciativas al respecto y habíamos debatido estos temas previamente.

En definitiva, ahora aceleramos nuestra actividad para brindar una respuesta rápida. Creo que muchos de los puntos reclamados en las importantes manifestaciones realizadas frente al Congreso de la Nación y ante los Tribunales van a tener hoy respuesta con las sanciones legislativas que seguramente vamos a efectuar y con el compromiso de tratar el tema de la sumatoria de las penas en la sesión del próximo miércoles, con dictamen de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales.

Creo que se trata de un buen proyecto, que unifica el criterio del sistema de concursos y fija un tope de cincuenta años en el caso de concurso de delitos, a la vez que constituye una respuesta terminante en el concepto mencionado por algunos señores senadores respecto del carácter retributivo y ejemplificador de la pena, siendo este último un concepto que faltó afirmar; es decir, la medida ejemplar de la pena que brinda el Estado a aquellos que han violentado la ley. En efecto, un Estado que no establece un sistema punitivo abre la respuesta más primaria, que es la individual, la de la venganza o la de la justicia por mano propia.

Así que con el compromiso de tratar el miércoles esta última iniciativa que cierra el marco de una agenda parlamentaria que el Senado trató con eficacia, con responsabilidad y con decisión, y quedando a la espera de los proyectos que va a mandar el Poder Ejecutivo en el plan de seguridad integral ya diseñado, creo que estamos cumpliendo una primera etapa.

Por supuesto que no tengo más que compartir la primera iniciativa que surgió acá, en el Senado, que fue trabajada en la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, que hace a la limitación de la libertad condicional en el artículo 13. La Cámara de Diputados la mejoró, fijando en 35 años el tope que nosotros habíamos planteado en 20.

Compartimos esta decisión y vamos a votar afirmativamente en general y en particular este primer proyecto que hemos discutido, transformándolo en ley. Esto es importante porque la

mentablemente en la Argentina –y hay ejemplos reiterados–, frente a hechos graves, nadie cumplía más de diez u once años de prisión. Diez u once años era lo máximo que cumplían asesinos feroces que cometían delitos gravísimos y luego el sistema –un sistema realmente benigno– los ponía en libertad.

El otro proyecto hace a la reforma de los artículos 119 y 120, que contemplan las figuras de la violación y el posterior homicidio de la víctima. Por supuesto que no tenemos más que ratificarlo. Acá había iniciativas de varios senadores: un proyecto del senador Gallia y creo que dos proyectos más de otros dos senadores; es decir, el Senado ya tenía un trabajo elaborado sobre este tema. Al respecto aparece la duda que plantea el senador Agúndez sobre la conveniencia de reformar esto, de especificar el carácter del homicidio doloso. Por una cuestión de eficacia legislativa esta iniciativa no debe volver a Diputados. Estamos hablando del homicidio doloso, del homicidio que se hace, incluso, para ocultar el rastro de la violación y respecto del cual, además, hay una frontera bastante difícil de evaluar en lo que hace al concepto de homicidio accidental.

Perdónenme que les quite un poco de tiempo, pero quiero contarles algo, así sabemos de qué estamos hablando en este país. Hace dos días en el diario “Clarín” salió un artículo terrible acerca de lo que es el sistema judicial argentino. Hoy hay una demanda en cabeza de la provincia del Chubut. Se trata de un asesino violador, que fue condenado en la provincia del Chubut por un doble homicidio: la violación y el asesinato de la madre y, posteriormente, la violación y el asesinato de la hija. Un sujeto terrible que, además, tuvo su paso también por la provincia del Neuquén, donde fue violador y asesino de una niña que enterró en la terminal del Neuquén. Los jueces de esa provincia no encontraron elementos suficientes como para proceder a la detención. Con lo cual, su raid delictivo de homicida y asesino lo concluyó en la ciudad de Olavarría, donde, por supuesto, terminó secuestrando, violando y asesinando a una niña de 6 años de edad.

Este sujeto, de apellido Sallago, tenía que cumplir una condena. La primera condena, del año 1983, era a veintiún años y seis meses de prisión, por doble violación y homicidio. O sea, violó a las dos víctimas –a la madre y a la hija–, en

tiempos distintos: un día a la madre y al otro a la hija; las mató a las dos y le dieron veintiún años. Sallago jamás cumplió la condena completa. Solamente llegó a cumplir once años, porque en el medio hubo algunas conmutaciones; ley de ejecución penal, el camino del dos por uno. En fin... este sistema determinó que en el año 1998 Sallago saliera en libertad.

Por supuesto, se fue del Chubut y se radicó en el Neuquén, en donde cometió ese delito terrible. La justicia neuquina lo detuvo y los jueces dijeron que no encontraron elementos. El pasado de Sallago parece que no fue valorado debidamente en el momento en que lo detuvieron en Neuquén. De allí el sujeto se fue a Olavarría, donde concluyó su raid y lo detienen.

Hoy hay una demanda de parte de la familia de la chiquita de Olavarría, porque si este sujeto hubiera cumplido la condena como correspondía, en el momento que termina asesinando y violando a esta chiquita en Olavarría, debería haber estado preso cumpliendo la condena. Entonces de este tema estamos hablando.

Ahora, yo digo una cosa. Evaluemos las características que planteaba recién el senador Agúndez, el carácter accidental del homicidio. Secuestro de una niña, violación y, en el medio de la violación, a lo mejor la sofoca y muere. ¿Es accidental, es doloso? Me pregunto cuál es la diferencia. La viola, intenta escapar y la mata. ¿Es doloso, es culposo? ¿Cuál es la diferencia? En ambos hechos, en ambas circunstancias, indudablemente hay una intención de ocultar el hecho. En el hecho posterior, en el carácter accidental, creo que hay una frontera demasiado frágil. Pero estamos sobreentendiendo que hay intención de matar. Esta es la figura que hoy estamos votando: la intención de matar, el acto doloso. Por eso, nosotros vamos a ratificar la votación de la Cámara de Diputados, vamos a apoyarla desde nuestro bloque, dado que no tenemos aquí ninguna duda. Consideramos que sobre estos sujetos que cometen delitos aberrantes tiene que recaer la reclusión perpetua y el techo de los treinta y cinco años. Aquí no dudamos. No tenemos ningún conflicto moral ni ético, ni nos preocupa demasiado el tema de la resocialización, porque estos sujetos no se resocializan. Son pertinaces además de reincidentes. En general, los violadores de menores son reincidentes.

La verdad es que en esta temática no me preocupa la resocialización de este tipo de sujetos, porque creo que no tienen cura.

Así que de esto estamos hablando, señores senadores. Una noticia que hace 24 horas salió en el diario "Clarín", el de principal tirada del país, pone al descubierto cómo funciona el sistema judicial argentino; cómo funcionan algunos jueces que actúan con una ligereza terrible. Porque si lo hubieran detenido y juzgado en Neuquén o hubiera cumplido la condena en el Chubut, este personaje no habría vuelto a violar y a matar a dos niñas: una en la provincia de Neuquén, en un crimen nunca esclarecido, y otra en Olavarría, en la provincia de Buenos Aires.

Vamos entonces al tercer punto, porque en los dos primeros temas vamos a respaldar con toda la convicción y la seguridad de que estamos haciendo las cosas que corresponde. El tercer tema hace al modelo de seguridad diseñado por el gobierno nacional, a la filosofía de la descentralización operativa y al marco de la Justicia nacional. No creemos estar votando algo para la ciudad autónoma porque, indudablemente, el ámbito de la Justicia nacional es el ámbito de lo que era la Ciudad de Buenos Aires como capital del país.

En este sentido ha habido un esfuerzo de compatibilizar este tema por parte de las autoridades de la comisión. Quiero rescatar la tarea que hicieron el señor senador Agúndez y la señora senadora Ibarra.

Creo, además, que estamos reivindicando nuestras propias facultades, porque el proyecto de la Cámara de Diputados ponía en cabeza del procurador la creación de fiscalías. De ninguna manera este Congreso le podía delegar al procurador general la creación de fiscalías. El único que puede crear fiscalías es el Congreso Nacional.

Esto ha quedado correctamente redactado. Está enmarcado en el plan de seguridad que todos los gobernadores han respaldado, cuenta también con el apoyo parlamentario y estamos votando esto con mucha convicción.

Por estas razones, señor presidente, nosotros vamos a respaldar los tres proyectos que hoy se han debatido.

Sr. Presidente (Guinle). – En consecuencia, corresponde inicialmente poner en consideración el dictamen producido con las modificacio-

nes introducidas por la Cámara de Diputados al proyecto de ley que le fuera pasando en revisión, que modifica los artículos 13, 14 y 15 del Código Penal respecto de delitos sexuales (S.-40 y 793/04).

Vamos a realizar una sola votación del dictamen de Diputados y que tiene a su vez dictamen propiciando el voto afirmativo.

Tiene la palabra la señora senadora Ibarra.

Sra. Ibarra. – Usted dijo que el proyecto era sobre delitos sexuales. El tema referido a libertad condicional no es vinculado a delitos sexuales.

Sr. Presidente (Guinle). – Es la reforma de los artículos 13, 14 y 15 del Código Penal contenida en los expedientes **S.-40** y 793/03.

Vamos a votar el dictamen que propicia aceptar las modificaciones introducidas por la Cámara de Diputados.

Tiene la palabra la señora senadora Ibarra.

Sra. Ibarra. – El voto negativo implica la insistencia en nuestra sanción. El voto afirmativo implica la aceptación de las modificaciones.

Sr. Presidente (Guinle). – El voto afirmativo implica aceptar el dictamen que se ha producido en el Senado, por el que se aceptan las modificaciones de la Cámara de Diputados.

En consecuencia, si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general y en particular.

–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registraron 51 votos por la afirmativa, 4 por la negativa y ninguna abstención.

–El resultado de la votación surge de la planilla registrada informáticamente por la Dirección General de Imagen Institucional y Tecnologías de la Comunicación.¹

Sr. Presidente (Guinle). – Queda sancionado definitivamente el proyecto de ley. Se comunicará al Poder Ejecutivo.

A continuación, se va a votar el proyecto de ley venido en revisión por el que se modifica el Código Penal en lo que respecta a incrementar penas para homicidas y violadores (C.D.-6/04).

¹ Ver el Apéndice.

Tiene la palabra el señor senador Agúndez.

Sr. Agúndez. – Quiero hacer una aclaración. Nosotros vamos a votar en general afirmativamente el proyecto, porque llega a la misma conclusión, pero lo que queremos es otra redacción. Por lo tanto, hay que realizar dos votaciones.

Sr. Presidente (Guinle). – Vamos a realizar dos votaciones. Primero, vamos a votar en general y, luego, en particular.

Lo que se votará es el dictamen que también se produjo en el Senado, por el que se acepta el proyecto venido en revisión de la Cámara de Diputados.

Si no se hace uso de la palabra se va a votar.

–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registraron 53 votos afirmativos, dos negativos y ninguna abstención.

–El resultado de la votación surge de la planilla registrada informáticamente por la Dirección General de Imagen Institucional y Tecnologías de la Comunicación.

Sr. Presidente (Guinle). – En consideración en particular.

Tiene la palabra el señor senador Agúndez, que tiene una modificación para proponer.

Sr. Agúndez. – Señor presidente: precisa-mente voy a leer la propuesta del bloque de la Unión Cívica Radical. El artículo diría así: “La pena será de 15 a 25 años de prisión o reclusión si de los hechos previstos en los artículos 119, 2º, 3º y 4º párrafos, y 120 resultare la muerte de la persona ofendida como consecuencia no querida por el autor. La pena será de prisión o reclusión perpetua si se causare intencionalmente la muerte de la persona ofendida”.

Digo esto, señor presidente, y lo repito, porque hace seis meses en este Senado aprobamos lo del secuestro extorsivo y lo de la privación ilegítima de la libertad agravada por muerte posterior. Y en ambas leyes pusimos la diferencia entre muerte intencional y muerte no querida.

De todas maneras, esto está claro, lo hemos aprobado en general. Llegamos a las mismas conclusiones. No podemos acompañar esto porque no queremos “chicanas” de los abogados ni lavado de manos de los jueces, señor presidente.

Sr. Presidente (Guinle). – Tiene la palabra el señor senador Pichetto.

Sr. Pichetto. – No aceptamos la propuesta, señor presidente. Vamos a votar la iniciativa tal como viene de Diputados y la vamos a convertir en ley.

Sr. Presidente (Guinle). – Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en particular el texto que tiene dictamen del Senado, por el que se acepta ese proyecto de ley en revisión tal como vino de Diputados.

–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registraron 40 votos afirmativos, 15 negativos y ninguna abstención.

–El resultado de la votación surge de la planilla registrada informáticamente por la Dirección General de Imagen Institucional y Tecnologías de la Comunicación.

Sr. Presidente (Guinle). – Queda definitivamente sancionado el proyecto de ley. Se harán las comunicaciones correspondientes.

Seguidamente, se va a pasar a votar el proyecto de ley en revisión sobre creación de fiscalías de distrito en el territorio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (C.D.-8/04).

Hay un texto que se propone, que modifica ese proyecto en revisión. ¿Obra sobre las bancas? ¿Tiene el texto cada uno de los señores senadores?

Varios señores senadores. – No.

Sr. Presidente (Guinle). – Senador Pichetto: lo escucho.

Sr. Pichetto. – ¿Por qué no hacemos una votación en general y luego vamos analizando artículo por artículo? Que se le dé lectura desde la Secretaría, artículo por artículo.

1

CONSTITUCION DE LA CAMARA EN COMISION

Sr. Presidente (Guinle). – Por implicar gastos el asunto en consideración, corresponde constituir la cámara en comisión para formular dictamen y designar autoridades.

Sr. Pichetto. + Propongo que se constituya la cámara en comisión y se confirme a las autoridades de la mesa.

Sr. Presidente (Guinle). – En consideración la moción formulada por el señor senador Pichetto.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

–La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Guinle). – Queda constituida la cámara en comisión y confirmadas las autoridades para la conferencia.

2

CONFERENCIA

Sr. Presidente (Guinle). – Queda abierta la conferencia.

Corresponde considerar, entonces, el proyecto de ley en revisión.

Por Secretaría se va a proceder a leer inicialmente las modificaciones que se proponen, antes de votar.

–El texto es el siguiente:

Artículo 1º – Créanse las fiscalías de distrito en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que serán unidades que tendrán a su cargo la investigación de los delitos cometidos en el ámbito territorial de su competencia.

Art. 2º – Facúltase al procurador general de la Nación a establecer las fiscalías de distrito creadas por la presente ley, reasignando funciones de las fiscalías correccionales y de instrucción actuales.

Art. 3º – El procurador determinará el ámbito de actuación territorial de estas fiscalías, que tendrán intervención directa y exclusiva en todos los delitos de competencia de la Justicia Nacional en lo Criminal de Instrucción, y Correccional de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, previa consulta a las autoridades locales competentes.

Art. 4º – Dentro de los ciento ochenta días de sancionada la presente ley, se dispondrá el efectivo traslado de las fiscalías correspondientes a los barrios de: La Boca/Barracas; Devoto/Villa Pueyrredón; Liniers/Villa Luro; Villa Lugano; Mataderos; Villa Soldati; Constitución/San Telmo y Nueva Pompeya; para que desarrollen su labor en la jurisdicción de estas fiscalías de distrito.

El procurador podrá modificar la jurisdicción asignada a las fiscalías creadas por las leyes 25.748 y 25.749, reduciendo o ampliando el ámbito territorial de su competencia, según la evolución del mapa del delito.

Art. 5º – Para el resto de las fiscalías de distrito el procurador también determinará la asignación de causas tomando en cuenta el criterio territorial, si bien podrá mantenerlas en sus actuales sedes de

radicación hasta tanto sea posible el efectivo traslado. Mientras ello no ocurra el procurador podrá instalar oficinas de distrito con el fin de facilitar un conocimiento más profundo de la problemática delictual de la zona y un mayor acercamiento a la población y a las fuerzas policiales del lugar.

Art. 6º – Los magistrados que queden a cargo de las fiscalías de distrito serán fiscales de distrito y mantendrán el actual plantel de funcionarios y empleados. Regirá el principio de dotación periódica de fiscales entre las fiscalías de distrito creadas. El procurador dictará la norma respectiva para hacer regir la rotación periódica, que no podrá ser inferior a dos años en la zona. El procedimiento estará a cargo de los fiscales de cámara.

Art. 7º – El procurador determinará en cada caso la cantidad de fiscales que actuarán en cada fiscalía de distrito, atendiendo a la proporción entre la cantidad de fiscales y la cantidad de causas que ingresan a la misma. Reasignará también a los fiscales de juicio ante los tribunales orales en lo criminal que quedarán asignados a las fiscalías de distrito en base a los criterios de proporcionalidad y eficacia.

Art. 8º – Las fiscalías generales ante la Cámara Federal de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Ciudad de Buenos Aires, continuarán ejerciendo sus funciones de superintendencia, coordinación y apoyo, fijando criterios generales de actuación. El procurador podrá adoptar las decisiones conducentes para la distribución de dichas funciones de las fiscalías generales en relación a las fiscalías de distrito.

Art. 9º – Las causas que se inicien por denuncia ante la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, y por prevención o denuncia ante las dependencias de la Policía Federal Argentina y las de otras fuerzas de seguridad, se asignarán a la fiscalía de distrito competente según el lugar de comisión del hecho delictivo. Si esta circunstancia fuera desconocida o confusa, la fiscalía de distrito competente según el lugar de comisión del hecho delictivo. Si esta circunstancia fuera desconocida o confusa, la fiscalía de distrito a intervenir se determinará por sorteo. Asimismo se asignarán por sorteo entre las fiscalías de distrito, las denuncias por delitos cometidos por funcionarios públicos.

Art. 10. – Las cuestiones que se susciten por conflictos en la asignación de causas entre fiscales de distrito de distintas zonas, serán resueltas por el fiscal general ante la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional que esté a cargo de la zona a la que corresponda la fiscalía de distrito que previno.

Los conflictos entre fiscales de una misma fiscalía de distrito, serán resueltos por el fiscal general ante la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional que tenga a su cargo la zona respectiva.

Art. 11. – Créase la Unidad de Fiscales para Delitos Complejos que tendrá jurisdicción en todo el

ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El procurador general de la Nación determinará los delitos que, por su complejidad y características deban ser investigados por esta unidad de fiscales. Estará integrada por un grupo de fiscales no menor de a diez, que serán seleccionados mediante concurso interno de oposición y antecedentes entre el plantel de fiscales. Las causas se le asignarán por sorteo debiendo determinar el procurador general de la Nación el reglamento de sorteos que garantice su transparencia.

Art. 12. – El gasto que origine la puesta en funcionamiento de las fiscalías de distrito y de la Unidad de Fiscales para Delitos Complejos, se atenderá con las partidas del presupuesto anual de gastos que se asigne en cada ejercicio.

Art. 13. – El procurador está facultado para firmar convenios con el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de efectivizar el cumplimiento de la presente ley y el traslado de las fiscalías de distrito a nuevas sedes.

Sr. Presidente (Guinle). – En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se entenderá que el Senado constituido en comisión adopta como dictamen el texto del proyecto de ley que acaba de leerse.

–Asentimiento.

Sr. Pichetto. – Pido que se declare cerrada la conferencia.

–Asentimiento.

Sr. Presidente (Guinle). – Queda cerrada la conferencia.

3

VOTACION

Sr. Presidente (Guinle). – Continúa la sesión.

A continuación, se va a votar el pedido de abstención formulado por el señor senador Urquía.

–La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde votar el dictamen de la cámara constituida en comisión en el proyecto de ley sobre creación de fiscalías de distrito en el territorio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general.

Sr. Secretario (Estrada). – Se han registrado 45 votos por la afirmativa, 8 por la negativa y una abstención.

–El resultado de la votación surge de la planilla registrada informáticamente por la Dirección General de Imagen Institucional y Tecnologías de la Comunicación.¹

Sr. Secretario (Estrada). – Se debe dejar constancia de que se han registrado 45 votos afirmativos sobre un total de 54 senadores presentes. Por lo tanto, se han alcanzado los dos tercios de los votos.

Sr. Presidente (Guinle). – El señor senador por Río Negro realizó una propuesta a efectos de que en particular se voten en forma conjunta los artículos 1º a 13 inclusive. Si hay asentimiento, se procederá en la forma indicada.

–Asentimiento.

Sr. Presidente (Guinle). – Por consiguiente, se van a votar en forma conjunta los artículos 1º a 13 inclusive.

–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se han registrado 44 votos por la afirmativa, 8 por la negativa y una abstención. Por lo tanto, se han alcanzado los dos tercios de los votos de los senadores presentes.

–El resultado de la votación surge de la planilla registrada informáticamente por la Dirección General de Imagen Institucional y Tecnologías de la Comunicación.²

Sr. Presidente (Guinle). – Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable Cámara de Diputados.

57

EXPLOTACION LABORAL DE MENORES

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar si se trata sobre tablas el proyecto de comunicación de la señora senadora Lescano por el que se solicita la realización de las cam-

¹ Ver el Apéndice.

² Ver el Apéndice.

77

APENDICE

I

VOTACIONES

Votación nominal

122° PERÍODO LEGISLATIVO - ORDINARIO - 7ª SESIÓN

**Dictamen en las modificaciones introducidas por la Honorable Cámara de Diputados
en el proyecto de ley sobre modificación del Código Penal
respecto a delitos sexuales S.-40/04 y S.-793/04**

VOTACION EN PARTICULAR

Dictamen:

- Aceptación de las modificaciones introducidas por la Honorable Cámara de Diputados.

Acta N° 1	Fecha: 5-5-2004	Hora: 20.20.24
Tipo de quórum: Más de la mitad de los miembros del cuerpo	Mayoría requerida: Más de la mitad de los votos emitidos	Miembros del cuerpo: 72
Presidente: GUINLE, Marcelo	Desempeate: No	
Presentes identificados: 55	Votos afirmativos: 51	
Presentes no identificados: —	Votos negativos: 4	
Total presentes: 55	Abstenciones: —	
Ausentes: 17		
Valores afirmativos necesarios: 28	Resultado de la votación: Afirmativa	

Votación nominal

122º PERÍODO LEGISLATIVO - ORDINARIO - 7ª SESIÓN

**Dictamen en las modificaciones introducidas por la Honorable Cámara de Diputados
en el proyecto de ley sobre modificación del Código Penal
respecto a delitos sexuales S.-40/04 y 793/04**

VOTACION FN PARTICULAR

Dictamen:

- Aceptación de las modificaciones introducidas por la Honorable Cámara de Diputados.

Acta Nº 1

Fecha: 5/5/2004

Hora: 20.20.24

Tipo de Quórum:

Más de la mitad de los
miembros del cuerpo

Mayoría requerida

Más de la mitad de
los votos emitidos

Miembros del cuerpo: 72

Presidente:

GUINLE, Marcelo

Desempate: No

Apellido y nombre	Voto	Apellido y nombre	Voto
AGUNDEZ, Jorge A.	Afirmativo	MARINO, Juan C.	Afirmativo
ARANCIO DE BELLER, Lylia M.	Afirmativo	MARTIN, Floriana N.	Ausente
AVELIN, Nancy B.	Afirmativo	MARTINAZZO, Luis E.	Ausente
BAR, Graciela Y.	Afirmativo	MARTINEZ PASS DE CRESTO, Laura	Afirmativo
BUSSI, Ricardo A.	Ausente	MASSONI, Norberto	Ausente
CAFIERO, Antonio F.	Ausente	MASTANDREA, Alicia E.	Afirmativo
CAPARROS, Mabel L.	Ausente	MAYANS, José M. A.	Afirmativo
CAPITANICH, Jorge M.	Afirmativo	MAZA, Ada	Afirmativo
CAPOS, Liliana D.	Afirmativo	MENEM, Eduardo	Afirmativo
CASTILLO, Oscar A.	Ausente	MERA, Mario R.	Afirmativo
CASTRO, María E.	Afirmativo	MIRANDA, Julio A.	Afirmativo
COLOMBO DE ACEVEDO, María T.	Afirmativo	MORALES, Gerardo R.	Afirmativo
CONTI, Diana B.	Negativo	MÜLLER, Mabel H.	Afirmativo
CURLETTI, Mirian B.	Ausente	NEGRE DE ALONSO, Liliana T.	Ausente
DANIELE, Mario D.	Afirmativo	OCHOA, Raúl E.	Ausente
ESCUADERO, Sonia M.	Afirmativo	OVIEDO, Mercedes M.	Afirmativo
FALCO, Luis A.	Afirmativo	PAZ, Elva A.	Afirmativo
FERNANDEZ DE KIRCHNER, Cristina E.	Ausente	PERCEVAL, María C.	Afirmativo
FERNANDEZ, Nicolás A.	Afirmativo	PICHETTO, Miguel A.	Afirmativo
GALLEGO, Silvia E.	Afirmativo	PINCHETTI DE SIERRA MORALES, Delia	Afirmativo
GALLIA, Sergio A.	Afirmativo	PRADES, Carlos A.	Afirmativo
GIRI, Haide D.	Afirmativo	PUERTA, Federico R.	Ausente
GIUSTI, Silvia E.	Afirmativo	REUTEMANN, Carlos A.	Afirmativo
GIUSTINIANI, Rubén H.	Negativo	RIOS, Roberto F.	Afirmativo
GOMEZ DIEZ, Ricardo	Afirmativo	ROSSI, Carlos A.	Afirmativo
GUINLE, Marcelo A.	Afirmativo	SAADI, Ramón E.	Afirmativo
IBARRA, Vilma L.	Negativo	SALVATORI, Pedro	Afirmativo
ISIDORI, Amanda M.	Ausente	SANCHEZ, María D.	Afirmativo
JAQUE, Celso A.	Afirmativo	SANZ, Ernesto R.	Afirmativo
JENEFES, Guillermo R.	Afirmativo	SAPAG, Luz M.	Ausente
LATORRE, Roxana I.	Afirmativo	TAFFAREL, Ricardo C.	Afirmativo
LEGUIZAMON, María L.	Afirmativo	TERRAGNO, Rodolfo	Negativo
LESCANO, Marcela F.	Afirmativo	URQUIA, Roberto D.	Afirmativo
LOPEZ ARIAS, Marcelo E.	Afirmativo	YOMA, Jorge R.	Ausente
LOSADA, Mario A.	Afirmativo	ZAVALIA, José L.	Ausente
MAZON, Rubén H.	Afirmativo		